

ROSA LUXEMBURG STIFTUNG

**Oficina Regional para México,
Centroamérica y el Caribe**

ELECCIONES 2018: MIRADAS DE LAS IZQUIERDAS EN MÉXICO



Rosa Luxemburg Stiftung
Gesellschaftsanalyse und Politische Bildung e.V.
Oficina regional para México,
Centroamérica y El Caribe

Dirección
Sandy El Berr

Coordinación de Comunicación y Publicaciones
Clara G. Meyra Segura

Escriben
Sandy El Berr
Carla Vázquez y Patricia Zapata
Luis Hernández Navarro
Carlos Andrés Rodríguez Wallenius
Gloria Muñoz Ramírez
Cirenia Celestino
Antonio Cerezo Contreras

Corrección de estilo:
Cooperativa Editorial Viandante
alessandrpradel@gmail.com

Diseño de interiores y de portada
Gabriela Reygadas Robles

Rosa-Luxemburg-Stiftung, Oficina Regional
para México, Centroamérica y El Caribe
Calz. General Pedro Anaya 65,
Colonia San Diego Churubusco,
Coyoacán, C.P. 04120, CDMX



Esta obra se encuentra bajo Licencia Internacional
de Creative Commons 4.0:
Atribución-Licenciamientos Recíproco.

Los contenidos de esta publicación se pueden
reproducir y compartir por cualquier medio,
siempre y cuando se respete su autoría, se den
los créditos correspondientes y se cite la licencia
correspondiente.

Esta publicación es financiada con recursos de la RLS
con fondos del BMZ.

Esta edición es de distribución gratuita,
queda prohibida su venta.

*Las opiniones vertidas en esta obra reflejan el punto
de vista e interpretación de las personas autoras y no
representan una posición oficial de la RLS.*

www.rosalux.org.mx | info@rosalux.org.mx



10 años

2018

ROSA LUXEMBURG STIFTUNG
MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

ÍNDICE

- 3** Presentación
- 4** Las expectativas, el mayor desafío de Lopez Obrador
- 12** El abrazo del Camino Real
- 19** Seguir luchando, fue el acuerdo
- 26** Despojo y resistencia social en México: balance y perspectivas ante un nuevo gobierno
- 33** Humanidad, dignidad, libertad y el poder de las mujeres
- 38** Panorama y desafíos para las organizaciones de derechos humanos y para las personas defensoras de derechos humanos ante las actuales definiciones electorales en México

Elecciones 2018: Miradas de las izquierdas en México

La compilación de lecturas que tienen en sus manos es una pequeña contribución de la Rosa Luxemburg Stiftung (RLS), Oficina Regional para México, Centroamérica y El Caribe, al debate sobre la coyuntura poselectoral mexicana de 2018. En esta publicación hemos integrado seis textos con el análisis de diversos actores políticos y de las izquierdas en México, así como de nuestra oficina.

Consideramos que el objetivo fundamental de esta compilación es abrir espacios a diversos planteamientos en relación con los temas que consideramos centrales en el contexto actual de México, de tal forma que se respeten las posiciones de las distintas izquierdas. Es así como recuperamos hoy más que nunca las palabras de Rosa Luxemburg: **“La libertad es siempre la libertad de quien piensa diferente”**.

También aprovechamos para presentar de manera general a nuestra fundación y el trabajo que realizamos. La RLS es una de las seis fundaciones políticas alemanas. Tenemos cercanía con el Partido Die Linke (La Izquierda), un partido político de la oposición, con representación en el parlamento nacional de Alemania. Esta izquierda pluralista alemana nació de la fusión de varias corrientes en 2007, entre ellas el Partido del Socialismo Democrático (PDS) y la WASG (Alternativa Electoral por la Justicia Social), pero también incluye a sectores disidentes de la socialdemocracia, de gente desencantada del Partido Verde, de sindicalistas, de activistas de movimientos sociales y de la izquierda radical.

La fundación tiene como inspiración teórica y práctica el socialismo democrático y el internacionalismo de la gran mujer revolucionaria polaca-alemana: **Rosa Luxemburg**. La aspiración política que compartimos con ella es la de construir una sociedad donde destaquen la libertad política, la igualdad social y la justicia.

La sede de la RLS se encuentra en Berlín, Alemania, y cuenta actualmente con 22 oficinas en el mundo. Nuestra oficina regional ubicada en la Ciudad de México abrió sus puertas en el año 2008. Somos una institución de formación política desde las izquierdas y trabajamos no solamente en México, sino también en Guatemala, Cuba, Costa Rica y Nicaragua.

Durante la coyuntura electoral una fundación de vocación izquierdista obviamente no puede dejar de lado las discusiones, argumentos y propuestas de la opción más cercana a su planteamiento político. Por eso invitamos a representantes de diversos sectores de las izquierdas –provenientes de distintas organizaciones y espacios, quienes desde sus luchas y experiencias aportan a construir un país más justo– a analizar la situación política de México ante el triunfo de Morena como partido de izquierda, y plantear retos y posibles escenarios del nuevo gobierno entrante.

Las contribuciones a esta publicación fueron realizadas por **Carla Vázquez** y **Patricia Zapata**, coordinadoras de proyectos en nuestra oficina de México; **Luis Hernández Navarro**, escritor y periodista, coordinador de la sección de Opinión del diario *La Jornada*; **Carlos Andrés Rodríguez Wallenius**, profesor del departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Campus Xochimilco; **Gloria Muñoz Ramírez**, directora de la agencia de información *Desinformémonos*, quien ejerce el periodismo independiente y alternativo desde hace 30 años; **Cirenia Celestino**, coordinadora del área de Estrategias de Comunicación y del Observatorio de Medios de Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC); y **Antonio Cerezo Contreras**, coordinador del área internacional del Comité Cerezo México, organización de Derechos Humanos ganadora del Premio Aquisgrán de la Paz, Alemania, 2012.

Agradecemos de manera especial cada una de las colaboraciones que amablemente nos compartieron para la conformación de esta publicación, y deseamos que estos textos sirvan para analizar y articular miradas que fortalezcan a las izquierdas en México.

Les deseamos una lectura muy provechosa.

Sandy El Berr

*Directora de la Oficina Regional de la RLS en México
Agosto de 2018*



Las expectativas, el mayor desafío de López Obrador

Carla Vázquez Mendieta y Patricia Zapata | Coordinadoras de proyectos RLS

Cuando el péndulo está del lado derecho del espectro político continental, México sorprende con una elección en la que el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (AMLO) del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que encabeza una alternativa social, triunfa de manera apabullante en las elecciones del pasado 1 de julio. Con ello despierta lo que será el mayor desafío del próximo gobierno, cumplir con una inmensa cantidad de expectativas que se generaron en el país y en la región latinoamericana donde, luego del ascenso de diversos gobiernos progresistas en la última década, asistimos a un serio reflujó de estas fuerzas políticas.

Diversos factores permitieron el triunfo de López Obrador. El político tabasqueño logró capitalizar el hartazgo de la población frente a la corrupción escandalosa que rodea a la vida política mexicana. Él hizo de la lucha contra este delito su principal bandera y esto le dio resultados positivos, pero tratar de enfrentarla no significa resolver los problemas estructurales que existen en el país y que generan las condiciones de pobreza, marginación, exclusión, polarización y violencia que se viven en México.

Hacer de la lucha contra la corrupción el centro de una plataforma programática es insuficiente y esto se ha demostrado en diversos casos por toda América Latina, basta recordar lo sucedido en 2015 en Guatemala. Es tan relevante la indignación social que produce este flagelo que tanto el imperio estadounidense como las derechas latinoamericanas lo han utilizado como pretexto para deslegitimar los proyectos políticos de izquierda.

Andrés Manuel llegará a la presidencia de México el próximo 1 de diciembre de 2018 en su tercer intento por alcanzar este cargo y en condiciones inmejorables en cuanto a legitimidad política, ya que logró obtener más votos que todos sus contrincantes juntos. Esto fue posible gracias a la capitalización del descontento y el hartazgo popular, que dio en 2018 un voto de castigo a la corrupción. En medio de este revuelo y sin haber asumido formalmente el cargo aún, ha anunciado algunas decisiones que tomará una vez en funciones, así como estrategias de gobierno que empiezan a despertar temores y suspicacias. Por una parte, temores alimentados en gran medida por la figura que fuerzas opositoras construyeron alrededor de López Obrador y su

proyecto de “izquierda radical”, sin que esta idea se sustentara con argumentos sólidos. Por otra parte, suspicacias alimentadas con grandes expectativas por parte de quienes decidieron apoyar el proyecto de Morena. Sin embargo, habrá que esperar unos meses más para poder hablar de las primeras acciones de su gobierno.

El entusiasmo de unos (muchos) y el temor de otros (pocos, pero poderosos), ha tenido como respuesta un lenguaje en un tono conciliador que superó las arengas de campaña para convertirse en un discurso como futuro gobernante. AMLO intentó atemperar los temores y tranquilizar a los sectores económicos nacionales e internacionales, ya que partió de la premisa de “por el bien de todos, primero los pobres”.

El contexto preelectoral

En el 2006, México tuvo una crisis política evidenciada por el hecho de que el presidente electo, Felipe Calderón, se tuviera que prácticamente colar al Congreso de la Unión para tomar protesta luego de ganar los comicios por un estrechísimo margen del 0.56% de los votos, después de que la institucionalidad democrática se negara a la reivindicación de López Obrador para hacer un recuento de los votos. En 2012 las elecciones otro elemento manchó los comicios. Una escandalosa compra de votos se destapó cuando miles de personas se presentaron en tiendas de autoservicio para hacer compras con tarjetas prepagadas ofrecidas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a cambio de los votos por el presidente hoy saliente Enrique Peña Nieto.

La historia de fraudes en México es mucho más larga que eso, habría que analizarla en la época contemporánea quizás desde 1988 cuando tras 70 años en el poder el PRI hizo un fraude mucho más burdo que implicó la caída del sistema para el conteo de votos¹. En el momento en el que éste se “cayó”, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el abanderado de la izquierda, encabezaba los resultados. Sin embargo, cuando se logró restaurar el sistema, los votos favorecían al

priista Carlos Salinas de Gortari, quien finalmente gobernó hasta 1994 con una historia marcada por la crisis económica, la firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN) y la salida a la luz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Más recientemente, en las elecciones del Estado de México de 2017, se logró el triunfo del candidato priista y primo de Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo, a través de un catálogo de maniobras que van desde la compra y coacción del voto; peculado electoral; guerra sucia a través de los medios contra Morena; violencia para sembrar el miedo e inhibir el voto; control de las instituciones electorales, entre otros mecanismos que dejaron en un segundo lugar a la maestra Delfina Gómez².

Con estos antecedentes, las últimas elecciones representaron un desafío para la débil democracia mexicana en los comicios, en los que más puestos de elección popular se han disputado en la historia del país, y que además se realizaron en medio de un clima inusitado de violencia. Desde el 8 de septiembre de 2017, fecha en la que inició oficialmente el proceso electoral, hasta el 1 de julio, 152 políticos fueron asesinados, de los cuales 48 eran precandidatos y candidatos a puestos de elección popular. El día de las elecciones se contabilizaron 774 agresiones, concentradas en seis de los 32 estados de la República: Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Estado de México, según cifras del informe sobre violencia política³.

Caracterización de Morena

Para entender la victoria aplastante de este partido y poder vislumbrar los desafíos que conllevará su gobierno de mayoría es necesario dar algunos antecedentes. El Movimiento de Regeneración Nacional se constituyó como asociación civil en 2011, como un esfuerzo organizativo convocado por Andrés Manuel López Obrador justo antes de la segunda

1 En 1929 José Vasconcelos denunció con pruebas y documentos el fraude con que dieron el triunfo de las elecciones presidenciales a Plutarco Elías Calles. Ni con la legitimidad que Vasconcelos enarbolaba y su plan para convocar una nueva Revolución, se pudo revertir el fraude, obligando a éste al exilio en Estados Unidos.

2 Villamil, Jenaro, “El decálogo del fraude electoral y la elección de Estado en Edomex”, en la revista *Proceso*. México, 6 de junio, 2017. <<https://www.proceso.com.mx/489939/decalogo-del-fraude-electoral-la-eleccion-en-edomex>>

3 Séptimo Informe de Violencia Política en México 2018, consultora política Etellekt.

contienda en la que pretendía llegar a la presidencia. Esta convocatoria se dio en un contexto grave de aumento de violencia e impunidad en el país y cuando la consolidación del modelo neoliberal era inminente, ya que se avecinaba la aprobación de reformas estructurales muy agresivas que serían necesarias para su implantación.

Al asumir el poder en diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto convocó a la conformación del Pacto por México, una estrategia para aprobar dichas reformas con el respaldo de los grandes partidos políticos, sin distinción de principios ideológicos. Este fue el pacto en el que tuvieron cabida desde la derecha liderada por el Partido Acción Nacional (PAN), hasta lo que fuera la izquierda del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fuerza que antes había postulado a López Obrador, pero de la que ya se había desmarcado éste.

Ante esta situación, Morena, que en sus inicios se conformó como un movimiento a través del trabajo político local, se constituyó como un frente crítico a estas reformas, principalmente respecto a la energética, ante la que enarbolaba un discurso de defensa nacionalista de los recursos energéticos, en particular del petróleo.

En el año 2014 este grupo tomó finalmente la decisión de constituirse como partido político, lo que le permitió contender a cargos en la elección intermedia del siguiente año con extraordinarios resultados, ya que ningún partido que participara por primera vez en la contienda había logrado alcanzar más del 8% conseguido por Morena en 2015 en el centro y sur del país. Esto opacó incluso al PRD, partido que había generado mucha disconformidad entre sus militantes y simpatizantes al aceptar la firma del Pacto y al mismo tiempo autoproclamarse como una fuerza de izquierda.

A pesar de transitar de movimiento a partido político, Morena evitó actuar con la lógica de éste último hacia su interior, es decir, se abstuvo de llevar a cabo procesos de formación política de cuadros, de poner restricciones ideológicas al momento de afiliar militantes, y de alguna manera siguió funcionando como movimiento al capitalizar a nivel territorial a líderes y representantes de comunidades en todo el país, independientemente de sus posturas políticas.

Esta estrategia permeó también la lógica de las prácticas que utilizó para designar candidatos en las elecciones de 2018, donde las encuestas de po-

pularidad constituyeron el criterio más importante. Como consecuencia, obligó a los candidatos a realizar trabajo local y permitió que líderes sin un precedente partidista lograsen una candidatura legítima sin negociaciones con grupos de poder de por medio. Además de esto, en cada región diversificaron las formas y estrategias para conseguir el mayor número de votos posible. Por ejemplo, se acercaron a reconocidos personajes y referentes éticos como médicos, maestros, líderes estudiantiles y juveniles con trabajo en territorio, y con ellos se apostó por la suma masiva de votos por encima de la formación política o la conformación de bloques con principios ideológicos similares.

Lo cierto es que la combinación de todas estas estrategias, junto con un sentimiento generalizado de hartazgo y frustración por parte de la ciudadanía, llevó a que un partido con sólo cuatro años de existencia lograra un resultado electoral en el que fue favorecido con 53.19% de los votos. Además, logró mayoría en 12 de los 27 congresos locales que se disputaron; por primera vez en 24 años un presidente gobernará con mayoría en el poder legislativo (Cámara de Diputados y Cámara de Senadores). Estos números causaron sorpresa aún en los más optimistas partidarios de López Obrador.

Otra cifra llamativa tiene que ver con la composición del próximo Congreso de la Unión ya que se lograron cifras históricas en cuanto a la presencia de mujeres. Según el Instituto Nacional Electoral, en la Cámara de Diputados habrán 244 mujeres (48%), mientras que en la de Senadores 63 mujeres (49%) ocuparán los curules. Sin embargo, aunque esto no garantiza la igualdad de influencia de las mujeres en los puestos de representación, se puede ver que en el equipo de trabajo cercano a AMLO la paridad no es sólo una cuestión de cuotas. Esto se hace evidente al ver el papel de mujeres como Tatiana Clouthier, vocera de la campaña y ahora posible subsecretaria de Gobernación, así como Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte, futura secretaria de Gobernación, o Rocío Nahle García, próxima secretaria de Energía, y en general, la composición de su gabinete.

También cabe mencionar que como fuerza de mayoría en los congresos y reconociendo sus limitaciones como partido político, Morena apuesta a un proceso de formación sobre la marcha, específicamente impulsando esfuerzos con legisladores ya electos que comenzarán a sesionar a partir del 1 de septiembre de 2018.

Más allá de la composición y los resultados de Morena en este proceso, las últimas elecciones atestiguaron también el contundente fracaso del todavía gobernante Partido Revolucionario Institucional. Esta fuerza política emanada de la Revolución Mexicana que había tenido el poder desde entonces hasta el año 2000, que después de 12 años de gobiernos panistas de derecha volvió al poder, con el peor resultado electoral en su historia al alcanzar a penas 16% de los votos. El candidato oficial no ganó en ninguna de las 32 entidades, ni logró uno sólo de los 300 distritos. Además, los congresos locales de los estados gobernados por el PRI, en los que hubo elecciones intermedias, fueron todos ganados por Morena.

La integración del gabinete

López Obrador con anticipación había revelado nombres de personas que colaborarían con él en su futuro gobierno. Sin embargo, la designación de lo que será el gabinete sigue generando algunas sorpresas, incertidumbres, simpatía e incluso malestares.

Al equipo de trabajo del presidente electo se han integrado muchos rostros que no vienen del servicio público, pero son verdaderos especialistas en los temas y las áreas en las que les corresponderá trabajar. Todo parece indicar que López Obrador se inclinó por un gabinete que tuviera un gran peso ético, que generara confianza, que fuera intachable, con algunas e importantes excepciones; más que por un equipo que contara con gran experiencia en la burocracia estatal. Es importante mencionar que así como el organismo legislativo, el ejecutivo tiene una cara de mucho mayor equidad de género. El equipo más cercano a López Obrador anunciado hasta ahora está compuesto por un número de mujeres próximo al 50%, lo que no sucede en cuanto a equidad etaria, ya que veremos un equipo de gobierno con una edad promedio de 62 años.

Al revisar los nombramientos hechos por el presidente electo, pareciera que con algunos de ellos el político tabasqueño está cumpliendo con compromisos adquiridos en campaña, de no ser así no podría explicarse el hecho de haber nombrado a Víctor Villalobos al frente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), un reconocido impulsor de la producción de

transgénicos y asociado a empresas transnacionales como Bayer-Monsanto. Sobre su nombramiento, María Colín, abogada de Greenpeace México, aseguró que su currículo tiene una “marcada tendencia a favorecer los intereses de la industria biotecnológica y menospreciar a los detractores del acaparamiento corporativo y la devastación ambiental”⁴.

Habrá que ver si pese a este nombramiento la nueva administración puede cumplir con la agenda que planteó el pasado 10 de abril en el estado de Zacatecas con respecto al campo, donde, entre otras cosas, se comprometió a aumentar la producción de alimentos, a eliminar las importaciones, a tener precios de garantía, a compras gubernamentales de cosechas, a asistencia técnica y procesos organizativos que rescaten al campo mexicano del deterioro y abandono en el que se encuentra⁵.

Otro anuncio polémico fue la designación de Alfonso Romo, al frente de la oficina de gobierno, equivalente al cargo de primer ministro en otros países, uno de los grandes empresarios neoliberales del país, quien fungió como su vínculo directo con otros inversionistas e incluso fue el operador para que López Obrador se encontrara y limara asperezas con los principales dueños de empresas del país el pasado 5 de junio.

La izquierda mexicana, sobre todo la izquierda que asistió a las cuestionadas elecciones de 1988, testifica hoy estupefacta el nombramiento del expriista Manuel Bartlett como titular de la Comisión Federal de Electricidad. Bartlett era secretario de Gobernación y como tal, operador de la famosa “caída del sistema” en las elecciones de aquel año. Quizás el nombramiento tiene alguna justificación en el hecho de que siendo senador, Bartlett se opuso fuertemente desde la tribuna legislativa a la aprobación de la Reforma Energética, aunque recientemente reconoció el buen funcionamiento de la nueva ley que en términos prácticos abre camino a la privatización del sector energético. Sin embargo, es importante reconocer a Bartlett la defensa que asumió de los medios públicos y los derechos de las audiencias,

4 Véase en <http://www.greenpeace.org/mexico/es/Prensa1/2017/Diciembre/--Con-Victor-Villalobos-en-el-gabinete-de-Morena-el-campo-mexicano-esta-en-riesgo/>

5 Véase en <http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/isabel-cruz/desafios-y-compromisos-de-amlo-para-el-campo>

cuando se confrontó de manera categórica al duopolio televisivo en el marco de la aprobación de la llamada Ley Televisa 2006⁶.

Esteban Moctezuma Barragán, como titular de la Secretaría de Educación Pública, será el encargado de llevar a cabo los planes de Andrés Manuel en uno de los sectores más complejos del país, el educativo. El panorama que complejiza el futuro actuar de Moctezuma está dado por el anuncio que hizo Andrés Manuel López Obrador, en el último debate presidencial, sobre revertir la reforma educativa que ha tenido en los últimos años al gobierno en confrontación con el magisterio democrático. Esta reforma, como está planteada actualmente, lejos de buscar elevar la calidad de la educación, apuesta al desmembramiento de la educación pública y para el magisterio significa una reforma laboral que afecta sus derechos.

Es importante mencionar que Esteban Moctezuma, exfuncionario priista, era hasta hace poco tiempo el presidente ejecutivo de la fundación Azteca, parte de uno de los oligopolios de la información y el entretenimiento en México propiedad de Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios multimillonarios mexicanos incorporados en la revista *Forbes* en la lista de los hombres más ricos del mundo. Así que en sus manos estará cumplir o no con la expectativa del magisterio democrático mexicano, un sector altamente politizado y beligerante en la vida pública del país.

Si bien es cierto que los anteriores nombramientos en ciertos sectores generan suspicacias y descontentos, también es cierto que en el equipo de López Obrador podemos encontrar a personas con un alto reconocimiento dentro de las fuerzas de izquierda o en la investigación y la docencia. Entre ellas podemos mencionar a la exmagistrada Olga María Sánchez Cordero, que se hará cargo de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); el reconocido médico Jorge Alcocer Varela, quien será secretario de Salud (SSA); el nombramiento de la joven abogada Luisa María Alcalde como Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS); a María Luisa Albores, colaboradora y asesora de la Unión de Cooperativas Tosepan, que estará al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y en la Subsecretaría de Educación Superior estará

a cargo Luciano Concheiro.

Sin duda, al conformar el equipo de gobierno, López Obrador tuvo que recurrir a cuadros que no necesariamente tienen una tradición de izquierda o tuvo que conceder espacios a quienes lo apoyaron para llegar a la presidencia. Sin embargo, está por verse si dentro de los equipos de trabajo se incorporarán operadores especialistas en los temas que pueden jugar un rol de pesos y contrapesos en la administración pública y en las posiciones personales de los titulares de las secretarías. También habrá que esperar para comprobar si todos los nombramientos hechos hasta ahora realmente responderán al proyecto de nación que pretende impulsar quien será el presidente de México hasta 2024.

Sobre sus planes y planteamientos

En materia de austeridad y lucha contra la corrupción, uno de los ejes del discurso de Andrés Manuel López Obrador que sin duda le ayudó a ganar las elecciones del pasado 1 de julio, es la lucha contra la corrupción, necesaria pero insuficiente para superar los graves problemas con los que recibirá la nueva administración del país.

Al poco tiempo de haber ganado los comicios, el futuro presidente presentó un plan de 50 puntos por la austeridad y la lucha contra la corrupción entre los que destacan el agravamiento de las penas para los delitos de corrupción y tráfico de influencias; la suspensión de fueros y privilegios para funcionarios públicos; la austeridad en cuanto a compra de vehículos, equipos, asesores, viáticos y bonos; la reducción de 70% de los puestos de confianza; la reducción de guardaespaldas; la desaparición como tal del Estado Mayor Presidencial; la conversión de Los Pinos, inmueble que ha sido usado hasta el día de hoy como vivienda de la figura presidencial, en un espacio para el arte y la cultura, y por último el tan mencionado recorte salarial a los altos funcionarios. Para este recorte, Andrés Manuel anunció que su propio salario será sólo del 40% de lo que actualmente gana el presidente y que ningún funcionario público podrá ganar más que el mandatario. Esta decisión ha generado un sin fin de especulaciones y opiniones que van desde un amplio respaldo hasta un cuestionamiento profundo.

Es innegable que en el sector público mexicano hay salarios que resultan escandalosos, sobre todo para

6 Véase en <http://www.jornada.com.mx/2006/05/27/index.php?section=politica&article=023n1pol>

un país en el que cerca de 50% de la población⁷ vive en condiciones de pobreza, que se encuentra dentro del 25% de los países más desiguales del mundo, según datos de Oxfam, y donde vive el hombre más rico de Latinoamérica junto con 50 millones de pobres⁸. También es cierto que la diferencia de ingresos en el sector público es brutalmente desigual, ya que un alto funcionario puede ganar más de 25 veces lo que gana un empleado de base en el gobierno. Así que la medida de bajar los salarios de los altos funcionarios ha sido bien recibida por las capas populares en el país, aunque todavía no se sabe si esto afectaría también a funcionarios especializados en dependencias del Estado cuyo salario podría verse afectado al reducirse siguiendo la lógica escalonada. Esta situación podría generar eventualmente un proceso de fuga de profesionales del servicio público al privado, pues el tope máximo estará fijado por el ingreso que López Obrador ha definido para sí mismo que será cerca de 108 mil pesos mexicanos (aproximadamente 5 mil 500 dólares).

En materia de combate a la violencia, el equipo de Andrés Manuel López Obrador presentó ya una propuesta para pacificar al país sin disparar más balas y propuso combatir el círculo de la corrupción, la impunidad y la inseguridad, mediante un diálogo con la sociedad y descartando la militarización y confrontación armada como parte de la solución viable.

Esta propuesta incluye convocar a familiares y víctimas de delitos para crear una iniciativa de seguridad; presentar una Ley de Amnistía como base para construir una cultura de la paz; dignificar a la policía y regresar al ejército a sus cuarteles; la reducción de condenas para quienes den información que permita capturar a los capos; crear comisiones de la verdad; impulsar foros de diálogo con la ciudadanía y despenalizar la marihuana y la amapola, entre otros puntos. Por otra parte, plantea el combate a la pobreza con el impulso del empleo y becas a

jóvenes que potencialmente pueden ser reclutados por el crimen organizado.

En cuanto a la Ley de Amnistía, cabe decir que se trata de una estrategia amplia que contempla incluir planteamientos de las víctimas, sociedad civil, así como de personalidades y organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Open Society Foundation, Human Rights Watch, el Papa Francisco y la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU). A partir de reuniones y foros se obtendrán insumos para la nueva legislación que contempla la amnistía, principalmente, para menores de edad, a quienes se les brindarán opciones de empleo y educación, así como para campesinos que hayan sido pequeños productores de drogas. Por otra parte, no se contemplará impunidad a delitos de alto impacto como secuestro, desaparición u homicidio. Esta propuesta basada en la justicia transicional se ubica como una salida de un contexto de violencia hacia un proceso de pacificación.

Visto el fracaso de la lucha contra el narcotráfico iniciada por el presidente panista Felipe Calderón, la cual sumergió a México en un clima de violencia e inseguridad donde la presencia del capital criminal tuvo cada vez más preponderancia en la vida cotidiana, la propuesta de quien será presidente de México puede verse con optimismo al plantear necesariamente una estrategia diferente.

En cuanto al planteamiento acerca de la descentralización de las instituciones que dependen del Poder Ejecutivo, la zona metropolitana de la capital del país está conformada por la Ciudad de México y 60 municipios aledaños, según los resultados del censo del 2010. Cuenta con una población de alrededor de 22 millones de habitantes, lo que la convierte en una de las aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo. Esta concentración ha tenido grandes y elevados costos que van desde el tema ambiental, la seguridad ciudadana, complicaciones en el aspecto de protección civil y en la calidad de vida de los y las habitantes. Viendo lo anterior, resulta un proceso necesario la descentralización prevista desde 1985 después del sismo que dejó un número de muertos que oscilan entre los 6 mil y 10 mil decesos.

El 9 de octubre de 1985, después del devastador terremoto, se creó el Comité de Descentralización que tenía como objetivo que parte de las actividades del gobierno y la industria se mudaran de la Ciudad de México a los estados. Dos años después, el entonces

7 En sólo dos años el porcentaje de la población mexicana en pobreza aumentó del 45.5% al 46.2%, es decir, el número de pobres pasó de 53.3 millones a 55.3 millones entre 2012 y 2014, debido principalmente a un deterioro de los niveles de los ingresos de los mexicanos, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL).

8 Véase en <https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/en-20-anos-pobreza-en-mexico-se-mantiene-casi-igual-748246.html>

presidente Miguel de la Madrid, extinguió esta medida a través de un decreto del 11 de agosto de 1987.

López Obrador planteó en su campaña que impulsaría un proceso de descentralización que tendría como objetivo promover el desarrollo en todo el territorio nacional y mejorar las condiciones para enfrentar la vulnerabilidad de la ciudad. Al ganar las elecciones anunció que 21 secretarías e instituciones del Estado como Salud, Educación, Energía, Agricultura, Turismo, Economía, entre otras, serían reubicadas en los diversos estados del país y que en la Ciudad de México sólo se quedarían las secretarías como las de Marina, de la Defensa Nacional, de Gobernación, de Relaciones Exteriores y la Presidencia. En esta lógica ha ofrecido apoyos y facilidades para que los trabajadores puedan mudar su lugar de residencia, al mismo tiempo que el plan ha causado mucho revuelo en la opinión pública nacional.

Lo cierto es que impulsar este proceso puede ser costoso en términos económicos, políticos y sociales. El desafío del nuevo gobierno será hacerlo de manera planificada y ordenada para que los costos iniciales sean menores y los efectos benéficos también en las zonas de recepción de las secretarías obedezcan a un plan más amplio de distribución de recursos en el país.

Los desafíos

Frente a morena encontramos a una izquierda anticapitalista y a movimientos sociales de base que ven esta coyuntura más como una recomposición de las fuerzas capitalistas que como el triunfo de una izquierda política. En este sector hay quienes definitivamente no apoyaron a Andrés Manuel y otros que tácticamente decidieron darle su voto. Sin embargo, pese a las diferencias que pueden existir en torno a este panorama, la relevancia de la coyuntura y la oportunidad que se presenta para ir ganando espacios en la institucionalidad de un Estado descompuesto, debería representar una oportunidad irrenunciable para las fuerzas de la izquierda más crítica, para apostar por transformaciones que brinden un respiro después de años de violencia inusitada.

Quizás la representación más emblemática, aunque no la única, de esta izquierda anticapitalista es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que en la coyuntura electoral recién pasada cambió su estrategia política y sumó fuerzas para lograr una candidatura independiente, fue representada por

la figura de la médica tradicional indígena María de Jesús Patricio “Marichuy”, quien abanderó un esfuerzo para lograr ser inscrita como candidata presidencial. El nombramiento de Marichuy como vocera del Consejo Indígena de Gobierno, tuvo como objetivo, más allá de lograr la inscripción en el sistema electoral, “obligar a que la agenda de los pueblos originarios y las y los trabajadores pobres de nuestro país sea puesta en el tablero nacional y vayamos más allá de este sistema político”⁹. Esto explica por qué aunque la iniciativa fracasó, entre otras cosas, por lo excluyente del sistema político mexicano, la propuesta del Concejo Nacional Indígena (CNI) sigue siendo “abrir caminos para reconstruir el país”, impulsando a la fecha actividades de solidaridad con el CNI, festivales culturales y medidas que desde el territorio de las comunidades logren transformar su realidad desde abajo.

Pese a esta otra forma de incursión en la vida política, el EZLN rompió tajantemente cualquier posibilidad de acercamiento con el gobierno electo luego de un bien intencionado, pero desafortunado incidente en el que el padre Alejandro Solalinde, conocido por su amplio compromiso social, intentó impulsar un diálogo en nombre de López Obrador, desestimando los principios políticos fundamentales de dicho movimiento y su posición respecto al triunfo de AMLO. Ante este desencuentro, el EZLN rechazó categóricamente este acercamiento afirmando que después de estas elecciones “cambiaba el capataz, pero el dueño de la finca seguía siendo el mismo”.

Por su parte, el sector de derechos humanos, representado por más de 100 organizaciones, envió una carta al presidente electo donde exige tres aspectos indispensables a tomar en cuenta para iniciar un proceso real y efectivo que garantice los derechos humanos de las víctimas, proceso que tiene que considerar la justicia, la verdad, la memoria y la reparación integral y donde establece la necesidad de una Ley de Amnistía Federal; Comisiones de la Verdad y una Ley de Protección a Personas Defensoras y Periodistas.

Responder a las demandas de sectores como los anteriores es otro de los desafíos de un gobierno que se autonoombra popular y en defensa de los derechos

9 Véase en <https://www.congresonacionalindigena.org/2017/10/05/invita-cni-acompanar-registro-la-vocera-del-concejo-indigena-gobierno-ine-aspirante-candidata-independiente-la-presidencia-mexico/>

de los pobres y los excluidos. Andrés Manuel López Obrador también tendrá que buscar la forma de ser congruente con lo ofrecido a los sectores populares y demostrar que realmente está comprometido con las transformaciones de las que habla reiteradamente.

En materia ambiental y energética también es necesario estar pendientes para ver cómo se desenvuelve el nuevo gobierno. Hasta ahora lo declarado u ofrecido no garantiza un cambio del modelo y más bien profundiza la matriz energética y de desarrollo vigente basado en la explotación de combustibles fósiles. El corte nacionalista de López Obrador se enfrenta a una realidad en la que gran parte del territorio nacional está concesionado a empresas extranjeras y nacionales para la implementación de grandes proyectos extractivos que traen consigo despojo y pobreza a la población.

Puede perfilarse que hay aspectos que quizá representen una mejora en las condiciones del país como una mayor inversión social, la lucha contra la corrupción, el abandono de la guerra contra el narcotráfico y posiblemente un respiro en la criminalización del movimiento social y popular. Todo esto es insuficiente si se aspira a una transformación de izquierda, pero es necesario entender que la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, aún con toda la legitimidad que le dan los millones de votos conseguidos, tiene límites claros marcados por la esencia del proyecto encabezado por el tabasqueño.

También es real que el triunfo de Morena en México despierta grandes expectativas y esperanzas, por lo menos en el imaginario subjetivo de las fuerzas de izquierda en América Latina, al girar el péndulo político en esa dirección y dar cierto respiro a los proyectos que apuestan por una transformación que se distancia del proyecto neoliberal en la región, mismos que ahora sueñan con que Lula logre salir de prisión para gobernar a otro de los grandes países de América.

Las fuerzas políticas de América Latina deberían rescatar como lección aprendida lo sucedido con Morena, respecto a la potencialidad que representa aglutinar a amplios sectores del movimiento social en torno a una plataforma política para disputar los espacios de poder. Los resultados electorales alcanzados pusieron en evidencia la debacle profunda tanto de los partidos como de las formas tradicionales de hacer política.

En el ámbito internacional, López Obrador se enfrenta a una coyuntura compleja al tener que repensar las relaciones con el vecino del norte. No es casual

la llamada que Donald Trump hiciera al tabasqueño inmediatamente después de su triunfo, como tampoco lo es la visita que tres secretarios de Estado estadounidenses hicieron a las modestas oficinas del presidente electo. AMLO ha dejado clara su intención de que en agosto, tres meses antes de que asuma la presidencia, se den por concluidas las negociaciones y se cierren los acuerdos generales del TLCAN.

Sobre el TLCAN, López Obrador ha sido claro al expresar que está dispuesto a negociar de forma tripartita, incluso su equipo se integró a las negociaciones como parte de las acciones de relevo de gobierno, sin que esto represente de fondo un cambio estructural frente al tratado con América del Norte. Otro tema relevante en cuanto a la relación con los países del norte es el migratorio, que hasta ahora no ha tenido un espacio importante en la agenda política del presidente electo. Es de esperarse la voluntad y disposición política del gobierno mexicano para dejar de ser el patio trasero de los Estados Unidos, el ejecutor de prácticas denigrantes contra indocumentados, así como detener la crisis humanitaria por la que atraviesan migrantes centroamericanos y de este país en su camino al cruzar la frontera norte de México, agravada por la crisis de los niños y niñas separadas de sus padres deportados en EEUU.

También hay que dar un compás de espera porque la realidad es que a Andrés Manuel López Obrador le faltan casi cuatro meses para asumir el poder y mientras tanto hay una serie de decisiones que aún están en manos del saliente Enrique Peña Nieto, decisiones que pueden tener un impacto en el futuro del país porque aún es posible un mayor saqueo, despojo o endeudamiento del Estado, lo que pondría en riesgo los planes del futuro gobierno.

Andrés Manuel tiene frente a sí la compleja tarea de conciliar los intereses, así como las demandas de los sectores populares, muchos de los cuales lo apoyaron para llegar al poder con los intereses de los círculos económicamente poderosos en el país, así como lograr negociaciones convenientes con los grupos a los que decidió incorporar a su gobierno, sea mediante alianzas como el Partido Encuentro Social, de claro corte de derecha, o mediante designaciones en puestos de poder a personas que naturalmente no pueden considerarse representantes de la izquierda. Esto es un desafío que requiere creatividad, pero sobre todo voluntad política real y decisión para transformar el estado excluyente y represivo que actualmente representa este país.



El abrazo del Camino Real

Luis Hernández Navarro*

“La tercera es la vencida”, así dice un conocido refrán popular mexicano; así sucedió en las elecciones del pasado 1 de julio en México: Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tres veces candidato presidencial, triunfó en 2018.

No fue una victoria cualquiera. El abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia consiguió un éxito apabullante. Cosechó más de 30 millones de votos, es decir, poco más del 53% de la votación. Ganó cinco gubernaturas de nueve en disputa, entre las que se encuentra la joya de la corona: la Ciudad de México. Asimismo, la coalición obtuvo mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores.

Los comicios del 1 de julio fueron los más grandes en la historia de México. Se disputaron más de 4 mil puestos de elección popular: Presidente, 128 senadores, 500 diputados federales, nueve mandatarios estatales y un universo de legisladores locales y alcaldes.

* Periodista y escritor. Coordinador de Opinión y articulista semanal de La Jornada. Conductor de los programas de televisión “Cruce de Palabras” en Telesur y “A Contracorriente” en Rompeviento.TV. Sus últimos libros son *La novena ola magisterial* y *Hermanos en armas. Policías comunitarias y autodefensas*.

Las elecciones se realizaron en un clima de violencia desbordada sin precedentes. A lo largo de las campañas se registraron más de 600 agresiones y 145 asesinatos de políticos y candidatos. Sin embargo, el día de la votación, los comicios transcurrieron en relativa calma, salvo en entidades como Chiapas y Puebla. Esa violencia no fue privativa de la esfera política; Mayo de 2018 fue el mes con más homicidios desde que se comenzó a tener registro de ello: 2 mil 890 asesinatos, o sea 93 diarios. No fue un hecho aislado sino parte de una tendencia presente a lo largo de 2018. Durante los primeros cinco meses de este año, 13 mil 298 personas fueron asesinadas en el país.

López Obrador construyó una variopinta coalición electoral integrada por tres partidos políticos con registro legal, y figuras políticas de las más variadas orientaciones políticas. La columna vertebral de esa convergencia fue el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), su propio partido, fundado como una asociación civil en 2011 y que participó en comicios por vez primera en 2015. Lo acompañó el Partido de Trabajo (PT) una vieja agrupación de origen maoísta nacida en 1991, y el Partido Encuentro Social (PES), una organización de derecha evangélica, opositora al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y al reconocimiento del derecho a ejercer la diversidad sexual.

Entre sus aliados se encuentran Manuel Espino, exdirigente latinoamericano de la Internacional Demócrata Cristiana; Germán Martínez, expresidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), y Elba Esther Gordillo, la antigua lideresa del sindicato magisterial, conocida por sus actos de corrupción, detenida en febrero de 2013 y libertada el pasado 8 de agosto después de varios meses bajo arresto domiciliario.

Andrés Manuel capitalizó a su favor el enorme descontento social en contra del presidente Enrique Peña Nieto y del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los niveles de aprobación del mandatario durante el último año, y con dificultades, alcanzaron el 20%. Las elecciones se convirtieron en una batalla entre el miedo a lo desconocido y el cambio. López Obrador supo sortear con habilidad las intensas y sostenidas campañas de lodo en su contra –impulsadas en parte por algunos de los hombres más ricos de México, en las que se le presentaba como un nuevo Hugo Chávez o Nicolás Maduro– y se convirtió en el candidato de los jóvenes.

Primero lo primero

Apenas unos días antes algo así parecía imposible. Pero la fotografía es elocuente. Efusivo, el magnate Claudio X. González abraza a Andrés Manuel López Obrador, quien hasta hacía poco era su acérrimo enemigo. Su mano derecha está a punto de palmear la espalda del futuro presidente. En su cara se dibuja una enorme sonrisa. El abrazo del Camino Real selló un pacto entre el poderoso Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el candidato triunfante en la elección presidencial, tan solo tres días después de su triunfo “claro, contundente e inobjetable”,¹⁰ y apenas el día posterior a su reunión en Palacio Nacional con el presidente Enrique Peña Nieto.

Varios periódicos nacionales que pusieron en primera plana esta fotografía (o alguna otra parecida) resumieron el sentido de la “luna de miel” entre los señores del dinero y el futuro mandatario: “Confianza y certidumbre”, el signo de la nueva relación, publicaron. “Reconciliación”, dijeron otros. El mensaje

de la imagen era claro: el pleito entre ambos quedó atrás. A partir de ahora, los empresarios dejarán de llamar al tabasqueño “López” y se referirán a él como don Andrés Manuel López Obrador. Y, el ya casi presidente electo dejará de calificarlos de rapaces y dirá que son responsables.

Los mercados respiraron tranquilos con la foto. Las profecías de un inminente apocalipsis financiero inmediatamente después del triunfo del tres veces candidato no se cumplieron. En la reunión del Camino Real, el candidato ganador se comprometió a mantener la estabilidad macroeconómica. Igual lo hizo en el primer discurso que dio, inmediatamente después de que los candidatos derrotados y el presidente Peña Nieto reconocieron su triunfo. En la lista de sus compromisos no hay ambigüedad alguna: disciplina financiera, autonomía del Banco de México, no afectar la propiedad, bajar el coeficiente de deuda pública del PIB y revisar contratos bajo la norma de las leyes.

En el evento con el CCE, los empresarios respaldaron el plan de becas de trabajo de AMLO. El programa, que tendrá un costo de 100 mil millones de pesos, consiste en contratar a unos de 2.6 millones de muchachos en empresas, talleres y comercios como aprendices, a cargo de tutores, y con un sueldo financiado por el gobierno que provendrá de recursos obtenidos de recortar gasto superfluo.

El empresario Alfonso Romo, coordinador del Proyecto de nación de AMLO, cerró la pinza de la operación para acercar el mundo patronal al próximo jefe del Ejecutivo. En entrevista con la revista *Forbes*, Romo dijo que México deberá ser un paraíso para la inversión privada. Añadió que las Zonas Económicas Especiales (ZEE) deberán extenderse en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, sin “dejar nada fuera”.¹¹

A manera de paréntesis, cabe decir que Romo, quien durante algunos años formó parte de la lista de multimillonarios de la revista *Forbes* (de donde salió a raíz de la devaluación del peso mexicano de finales de 1994-95), es un hombre de negocios regiomontano que forjó parte de su fortuna al amparo de su relación privilegiada con los presidentes en

10 Rosa Elvira Vargas, “El triunfo de López Obrador, inobjetable, claro y contundente, reconoce Peña Nieto”, en *La Jornada*. México, 5 de julio de 2018. <<https://www.jornada.com.mx/2018/07/05/politica/007n1pol>>

11 Solís, Arturo, “México tendrá que ser un paraíso de inversión: Alfonso Romo” en *Forbes México*. México, 1 de julio, 2018. <<https://www.forbes.com.mx/mexico-tendra-que-ser-un-paraíso-de-inversion-alfonso-romo/>>

turno. Ha invertido en sectores tan diversos como la producción de semillas transgénicas, silvicultura, seguros y servicios financieros. Cercano al *Opus Dei* y los Legionarios de Cristo, defensor y banquero del general Augusto Pinochet, fue durante muchos años un activo y beligerante detractor de López Obrador. Cambió su posición en 2011, después de conocerlo personalmente. Lo investigué –declaró a la revista *Proceso*– “tan bien como si se tratara de la compra de una empresa. Indagué lo que hizo como jefe de Gobierno del df y sobre su supuesta relación con Hugo Chávez. Me llevé una grata sorpresa”, comentó en aquel momento.

Las ZEE por las que aboga son áreas geográficas de excepción que ofrecen un entorno de negocios con el objetivo de incentivar la inversión para industrializar estas zonas. Ofrecen a quienes invierten en ellas incentivos fiscales, facilidades al comercio exterior, beneficios aduaneros, un marco regulatorio ágil y desarrollo de infraestructura. Oficialmente existen en México desde junio de 2016 y se ubican en estados de la República con una significativa población indígena, que, en su mayoría, se opone a ellas porque abren la puerta al despojo de sus territorios y recursos naturales.

Poco antes de su entrevista con *Forbes*, en un aviso para navegantes, el mismo Romo confesó a la periodista Martha Anaya: “La idea y la instrucción personal de AMLO es crear confianza y no parar el país; recibir y echar a andar el plan que traemos, pero sin perder la inercia.” Y, para que no hubiera dudas del rumbo a seguir, añadió: “El país nos está dando un mandato de centro. Es un Plan de gobierno de centro que toma en cuenta a los olvidados”¹².

Los empresarios recibieron bien los mensajes. En un vídeo, integrantes del influyente Consejo Mexicano de Negocios (CMN), quienes poco antes eran hostiles a López Obrador y cuyos rostros son conocidos básicamente por aparecer en publicaciones de sociales que dan cuenta de sus celebraciones y funciones filantrópicas, reconocieron el triunfo del fundador de Morena y reiteraron que no dejarán de invertir en México. “Todos queremos que al nuevo gobierno le vaya bien, porque queremos que a México le

vaya bien”¹³ dijo el empresario Antonio Fernández Carbajal del Grupo Femsa.

Los mercados acogieron mejor esta noticia. Durante los días posteriores a los comicios, el peso registró su mejor semana en casi siete años: una ganancia de más del 4%. Y el mercado global accionario fue el segundo con mejor desempeño –medido en dólares– a nivel global, con revalorización de acciones.

El triunfo

Andrés Manuel López Obrador ha construido con tesón una base social propia (el pueblo obradorista) desde hace más de tres décadas. Ha acumulado fuerzas a lo largo de los distintos procesos electorales (dos elecciones locales en su natal Tabasco, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y tres contiendas presidenciales). Conoce todos los municipios del país. Ha sorteado con éxito furibundas campañas de desprestigio en su contra. La última fue promovida por los mismos empresarios que lo abrazaron en el Camino Real. Sin embargo, eso no implica que no vaya a tener contrapesos reales, aunque no estén en el Legislativo. Esos contrapesos son los poderes fácticos.

Su victoria del pasado 1 de julio puede explicarse por un cóctel letal de cuatro elementos que le dieron una base electoral arrolladora: la quiebra de un acuerdo cupular firmado en 2012 por los tres principales partidos políticos para impulsar un nuevo ciclo de reformas neoliberales bautizado como Pacto por México; la dramática crisis de derechos humanos evidenciada por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; el intento patronal de capitalizar a su favor la lucha contra la corrupción, que terminó siendo un búmeran; y, por último, la soterrada lucha interna del PRI entre los viejos militantes de ese partido y la tecnoburocracia que ganó su conducción. La combinación de estos cuatro factores le proporcionó al lopezobradorismo una base social mucho más amplia que la de sus simpatizantes tradicionales.

En cada ocasión en la que una élite “ilustrada” ha pretendido reformar radicalmente al país desde arriba en contra de los de abajo, el país real le ha cobrado la factura a los modernizadores y ha des-

12 Anaya, Martha, “La instrucción de AMLO: crear confianza”, en *El heraldo de México*. México, 20 de junio, 2018. <<https://heraldodemexico.com.mx/opinion/la-instruccion-de-amlo-crear-confianza/>>

13 “Video de empresarios sobre elecciones”, <https://www.youtube.com/watch?v=RvaarmYAu-8>

carrilado sus reformas. Así pasó con el Pacto por México y su nuevo ciclo de reformas neoliberales. Por su parte, López Obrador no fue parte del acuerdo; todo lo contrario, lo criticó. El Pacto por México era en realidad –denunció él– un Pacto contra México. Sin ambigüedad, se opuso públicamente a la gran mayoría de las reformas que lo acompañaron. Las señaló como parte de los negocios de la mafia del poder. Su apuesta resultó exitosa. Una parte de quienes organizaron la resistencia a estas medidas se sumaron a la ola lopezobradorista (maestros, consumidores de gasolina, habitantes de la Frontera Norte, pequeños empresarios) y votaron en contra de los partidos del Pacto por México.

Las movilizaciones por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron protagonizadas, mayoritariamente, por jóvenes. En ellas se exigió la renuncia de Peña Nieto. Una parte de sus promotores provenía de las jornadas de lucha del movimiento #YoSoy132. No fueron poco los participantes en las protestas que terminaron incorporándose a las filas de López Obrador. Se dio así la paradoja de que, el candidato de mayor edad tuviera el respaldo de la generación más joven.

La campaña de AMLO se centró en la lucha contra la corrupción pues para él siempre ha sido medular. En su concepción, las grandes fortunas y la desigualdad en México no provienen de la explotación, sino de la corrupción al amparo del poder público¹⁴. Y, según él, en el combate a este mal –y en la abolición de los privilegios de los servidores públicos–, se encuentra la llave para promover el desarrollo. Para hacerlo no serán necesarios aumentos a los impuestos, ni endeudar al país, ni ejecutar gasolinazos.

Poco antes del inicio de la campaña, siguiendo ejemplos como el de Guatemala o Brasil, la derecha empresarial trató de ganarle a AMLO la bandera de la corrupción. Creó organismos civiles y financió investigaciones periodísticas para legitimarse en este frente. Aunque la indignación ciudadana ante esta lacra creció exponencialmente, la apuesta política naufragó; pero el candidato de Morena la capitalizó. Nunca pudieron quitarle un liderazgo ganado a pulso. Lo había trabajado desde hace años. En 2005, en pleno desafuero, acostumbraba decir: “cuando

se es honesto, se es políticamente indestructible”¹⁵. No era una frase sino una guía para la acción.

Abierta o soterradamente, sectores muy importantes del PRI apoyaron a López Obrador en todo el país. Obligados a sumarse a un candidato y a un dirigente que no eran de su partido, excluidos de las candidaturas, sin recursos económicos para hacer proselitismo y maltratados por el equipo de campaña de José Antonio Meade, multitud de tricolores votaron por Morena. La tecnoburocracia del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) los despojó del gobierno, del partido y de los puestos de elección popular. Nunca tuvieron incentivos para que sus siglas triunfaran. Ellos se vengaron sumándose a las filas del amlismo.

El pulso con el zapatismo

Alejandro Solalinde es un sacerdote católico que ha realizado una activa defensa de los migrantes indocumentados centroamericanos en México. En un hecho inusitado para los ministros de culto, durante la pasada campaña electoral abogó abiertamente por Andrés Manuel López Obrador argumentando que es “la última esperanza”. Poco antes del 1 de julio, AMLO propuso al cura para encabezar la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Él declinó la invitación y sugirió para el cargo a la representante de la Comisión en Oaxaca, Elizabeth Lara Rodríguez.

Utilizando esa autoridad moral, pero sin comunicación oficial de por medio, Solalinde quiso mediar con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a nombre del futuro gobierno. Primero buscó informalmente a intelectuales que han acompañado al zapatismo y a personajes involucrados en procesos de paz para que sirvieran como puente. Cuando éstos rechazaron ser el canal de comunicación con los rebeldes, el sacerdote publicó dos tuits. Como si el problema de la falta de comunicación no tuviera una larga historia tras de sí y fuera responsabilidad de los “cashlanes que administran el zapatismo”, en su primer mensaje, del 9 de julio, Solalinde hizo un “llamado a los asesores ideológicos de los hermanos y hermanas zapatistas para que permitan el encuentro, el diálogo y

14 Véase “amlo en Los Reyes Acaquilpan, Estado de México” en <https://www.youtube.com/watch?v=04zqGpsr-is>

15 Maldonado, Saúl y Juan Carlos G. Partida, “Mi escudo protector es la honestidad; soy políticamente indestructible: AMLO”, en *La Jornada*. México, 9 de febrero, 2018. <<https://www.jornada.com.mx/2018/02/09/politica/009n1pol>>

la construcción del México que queremos. Podemos caminar juntos”. El segundo, del 11 de julio, anunció: “Alfonso Romo ofrece reunirse con los zapatistas. A través de él, el ahora presidente electo continúa invitando al Movimiento zapatista al diálogo. Los zapatistas tienen la palabra”. Los mensajes calentaron sensiblemente las redes sociales. De manera imprudente, a los tuits le siguió la divulgación pública de las conversaciones privadas que el misionero sostuvo con los personajes que él supuso le servirían de puente con los rebeldes; uno de ellos, el antropólogo Gilberto López y Rivas, publicó una enérgica respuesta en la que lo acusa de trasgredir “la discreción de conversaciones privadas”.

Los tuits muestran un enorme desconocimiento de las formas de hacer política del zapatismo. Hace falta mucha ingenuidad para suponer que Romo puede ser un interlocutor válido para los rebeldes. Aunque los insurgentes no han usado las armas desde que se acordó la tregua en enero de 1994, no han retirado su declaración de guerra al Estado mexicano ni se han desarmado. Desde hace más de 15 años están dedicados a construir la autonomía de facto en sus territorios, sin trato político con los gobiernos en turno. Si lo que realmente buscaba Solalinde era facilitar el acercamiento de las partes, el resultado final fue justamente el contrario. Si lo que pretendía era presionar a los rebeldes para forzar su rendición o precipitar su aislamiento, el desenlace fue el opuesto.

Lejos de entender que las señales no le eran favorables, Solalinde siguió adelante con su ofensiva. Falsamente, anunció que el grupo armado ya había aceptado un primer acercamiento con el equipo del virtual presidente electo y que entregaría una carta de AMLO a los rebeldes. A través de un comunicado del subcomandante Moisés, indígena tzeltal, los zapatistas negaron este hecho y añadieron que del padre Solalinde no han recibido “nada más que mentiras, insultos, calumnias y comentarios racistas y machistas”.

La historia del desencuentro público entre AMLO y el zapatismo se remonta a muchos años atrás; específicamente a julio de 1996. En esa fecha se acordó, en una reunión amplia entre el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el EZLN, efectuada en San Cristóbal de las Casas, el inicio de una “relación formal fundada en la solidaridad y el respeto mutuo” y el impulso a un proceso de cambio social amplio que se materializó en 11 puntos. En ese encuentro

participaron Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador. Sin embargo, momentos después de firmado, Porfirio Muñoz Ledo, presidente del partido del sol azteca, desautorizó el pacto. Quienes habían suscrito el acuerdo guardaron silencio. Desde ese instante los desencuentros entre ambas fuerzas fueron cada vez más frecuentes y graves.

El zapatismo no cree que alrededor del lopezobradorismo sea factible construir un movimiento de transformación política y social de fondo. No ve en él una fuerza antineoliberal. El triunfo electoral de Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de Gobierno de la Ciudad de México en 1997 abrió dentro del sol azteca un daño profundo e irreparable. Ese camino desembocó, cuatro años más tarde, en la apuesta de la dirección del PRD –en el que participaba activamente López Obrador– por impedir que el EZLN saliera a hacer política abierta en todo el territorio nacional, y en la incorporación de paramilitares chiapanecos a sus filas.

Sin embargo, los reproches de los rebeldes no se circunscriben a López Obrador. Sus críticas tocan al conjunto de la clase política. Desde su punto de vista, la degradación de los políticos profesionales es tan grande que no hay nada que hacer allí. Este proceso de descomposición se consumó en abril de 2001, cuando los partidos votaron por unanimidad en el Senado la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas que traicionó los acuerdos de San Andrés.

En contra de lo que usualmente se afirma, desde que el EZLN emergió a la vida pública, no ha sido una fuerza abstencionista. No ha llamado a la abstención ni al boicot electoral, sino a organizarse y luchar. Y, al menos en una ocasión, en las elecciones locales en Chiapas a finales de 1994, promovió el voto por un candidato a gobernador: Amado Avendaño.

En la antesala de las elecciones presidenciales de 2006, los zapatistas auspiciaron la organización de un gran movimiento nacional para transformar las relaciones sociales, elaborar un programa nacional de lucha y crear una nueva Constitución. Bautizaron este proyecto como *La otra campaña*, una iniciativa de política popular desde abajo y a la izquierda, independiente de los partidos políticos con registro, de corte anticapitalista. *La otra campaña* nunca llamó a abstenerse ni a boicotear las elecciones, pero criticó acremente a los candidatos de los tres principales partidos políticos, incluido Andrés Manuel López

Obrador. Cuando un enorme fraude electoral impidió el triunfo de AMLO e impulsó en la presidencia a Felipe Calderón, no faltaron seguidores del exalcalde de la Ciudad de México que quisieron responsabilizar a los zapatistas del resultado final de los comicios de 2006, a pesar de que el EZLN fue la primera fuerza política en denunciar nacionalmente el fraude.

Durante años, la posición de los zapatistas ante la cuestión electoral no tuvo variaciones. Así lo refrendó el subcomandante Moisés en el comunicado titulado “Sobre las elecciones: organizarse”, con fecha de abril de 2015. Allí advierte: “En estos días, como de por sí cada que hay esa cosa que llaman ‘proceso electoral’, escuchamos y miramos que salen con que el EZLN llama a la abstención, o sea que el EZLN dice que no hay que votar. Eso y otras tonterías dicen.” Y añade: “Como zapatistas que somos no llamamos a no votar ni tampoco a votar. Como zapatistas que somos lo que hacemos, cada que se puede, es decirle a la gente que se organice para resistir, para luchar, para tener lo que se necesita”.

En la coyuntura electoral de 2018, los rebeldes, junto al Congreso Nacional Indígena (CNI), acordaron impulsar, después de una consulta nacional, el registro en la boleta electoral como candidata independiente a la presidencia a una mujer, pobre e indígena. La médica tradicional nahua, María de Jesús Patricio (Marichuy), fue escogida como vocera de un nuevo organismo, germen de un poder popular construido desde abajo: el Concejo Indígena de Gobierno (CIG). Su campaña se centró no en conseguir firmas para su registro, sino en, desde abajo y la izquierda, con un discurso anticapitalista, mostrar la situación de opresión, discriminación, explotación y despojo en la que viven los pueblos indígenas, y llamar a la organización. La decisión no cayó bien en las filas de Morena y su candidato.

Aunque finalmente ni el CIG ni sus aliados lograron obtener las cerca de 800 mil firmas que Marichuy requería para aparecer en la boleta electoral, fue notable el proceso de autoorganización desde abajo que la iniciativa promovió.

Ante el triunfo de AMLO, el EZLN puso distancia. En un comunicado, señaló: “podrán cambiar al capataz, los mayordomos y caporales, pero el finquero sigue siendo el mismo”. La finca tiene una enorme importancia simbólica entre los indígenas rebeldes. Las fincas estaban asentadas en enormes extensiones de terreno, que, con frecuencia, excedían

los límites permitidos por la ley. Buena parte de su producción se destinaba al mercado de exportación. Sus dueños (los finqueros) no sólo colonizaron el territorio chiapaneco, sino también el conjunto de las instituciones gubernamentales. Ellos eran el Estado. Para quienes la padecieron, la experiencia de vida en la finca fue humillante. De esa vivencia, nació el coraje y la determinación de cambiar las cosas, la voluntad de rebelarse contra un orden no solamente injusto, sino indigno.

Es en este contexto que Alejandro Solalinde, sin mediación alguna, desconociendo toda esta historia previa, se lanzó a presionar a los zapatistas para negociar con ellos de parte de un gobierno que todavía no toma posesión.

El horizonte

El futuro presidente ha anunciado que emprenderá una cuarta transformación de la República. Sin embargo, no ha precisado ni detallado su iniciativa. Se trata –ha dicho– de un cambio profundo, pacífico y radical, que arrancará de raíz el régimen corrupto, de injusticia y privilegios; de una metamorfosis del cuerpo político en la que la soberanía volverá a radicar en el pueblo. Sigue pendiente la explicación de cuál es su punto de llegada, sus fuerzas motrices y su programa.

Con el nuevo gobierno no está en juego el cambio del modelo económico; no está a la orden del día el fin del modelo neoliberal en México. No está en puerta la opción de transitar hacia una ruta distinta a la del Consenso de Washington. El abrazo del Camino Real lo confirma. Y no está dispuesto por dos razones distintas: primero, porque López Obrador no postula la necesidad de caminar por una vía postneoliberal. Su programa de gobierno no plantea esa alternativa; segundo, porque desde 1994-1996 se han aprobado una serie de candados legales que blindan jurídicamente la ruta tecnocrática.

El Proyecto alternativo de nación, coordinado por Alfonso Romo, sostiene que hay que recuperar democráticamente al Estado y convertirlo en el promotor del desarrollo político, económico y social del país. Plantea que se consultará a la gente si las reformas estructurales se mantienen o se cancelan. Anuncia que el presupuesto será realmente público y se dará preferencia a los pobres. Insiste en la centralidad de la lucha contra la corrupción. Pero no

habla explícitamente –como hizo en el pasado– de limar las espinas más filosas del erizo neoliberal. Sin embargo, aunque no hay una ruptura de fondo con el modelo de desarrollo seguido hasta ahora, eso no significa que su proyecto sea mera continuidad del actual. Por supuesto que hay cambios pero ¿dónde están? En la revisión de los contratos para la obra pública y las concesiones gubernamentales, que son, a decir del historiador Lorenzo Meyer, el corazón de la política. Sobre todo, los de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM) y los de las concesiones de explotación de campos petroleros.

Una y otra vez, Alfonso Romo ha dado garantías a los inversionistas de que no se afectaran sus intereses. Sin embargo, una parte de éstos choca frontalmente con los de las comunidades rurales y pueblos indígenas. Así sucede, por ejemplo, con las concesiones mineras o con los proyectos energéticos. También con la noticia de construir un ferrocarril en el Istmo de Tehuantepec o con la intención de fomentar plantaciones forestales. El coche entre estas dos lógicas es inminente y de pronósticos reservados.

Uno de los más importantes y difíciles desafíos que tendrá que enfrentar el futuro gobierno de López Obrador es el que proviene de la inseguridad y de la captura de amplias franjas de las instituciones gubernamentales en varios estados por parte del crimen organizado. Para hacerle frente, se ha anunciado la formulación de una receta mexicana para pacificar el país, que contempla una consulta nacional para elaborar una ley de amnistía.

El reto es enorme. México es un importante productor de drogas. En sus montañas se siembra y procesa amapola y mariguana. Es el tercer fabricante mundial de heroína. También se elaboran metanfetaminas y es zona de paso de la cocaína proveniente de Sudamérica hacia Estados Unidos.

De acuerdo con un estudio del Congreso, las actividades económicas del crimen organizado representan el 10% del PIB, esto es, 150 mil millones de dólares. De esta cantidad, 40 o 45% proviene del tráfico de droga. Esto significa que el negocio de los estupefacientes mueve entre 60 mil y 70 mil millones de dólares. Se emplean en esta actividad alrededor de 450 mil personas. Al no haber empleo, el gran empleador es el narcotráfico. Las implicaciones de este flujo de dinero son múltiples: en el terreno

económico-financiero, en la política, en la procuración de justicia, y, por supuesto, en las elecciones.

AMLO es un hombre honrado. Sin lugar a dudas, luchará contra la corrupción. Sin embargo, problemas como el de la expansión del crimen organizado, la violencia asociada a ella y la terrible situación de derechos humanos no pueden ser solucionados desde el combate a esta lacra, que es consustancial al neoliberalismo. Requieren de una política diferente.

La lucha contra la corrupción está estrechamente asociada a la posibilidad de incubar una nueva clase política. El capital transnacional requiere de nuevos gestores políticos no tan maleados como los anteriores. El relevo generacional anunciado por Enrique Peña Nieto al comienzo de su sexenio resultó un fiasco completo. Los jóvenes gobernadores priistas que llegaron con él están hoy en la cárcel, acusados de las peores tropelías. Buena parte del equipo que arribará al gobierno con el tabasqueño no tiene tras de sí el estigma que acompaña a quienes dejaron la administración pública. Sin embargo, no todos tienen la trayectoria de su jefe. Las alianzas que pactó para llegar al poder han llevado a que en sus filas haya personajes asociados con lo peor de la política nacional. Su reto será establecer mecanismos eficaces de contraloría social capaces de frenar la descomposición de los nuevos funcionarios.

El triunfo de López Obrador está acompañado de grandes expectativas sociales a favor de la realización de cambios importantes, pero, también, de compromisos con fuerzas políticas que rechazan esas transformaciones. Se enfrentarán así, a la brevedad, quienes han abordado el barco amlista para capturarlo desde adentro a favor de intereses creados, y quienes buscan un país más democrático e incluyente. Aunque el resultado final de este pulso entre cambio y continuidad está en el aire, el abrazo del Camino Real da una pista de hacia donde se inclina la correlación de fuerzas.



Seguir luchando, fue el acuerdo

Gloria Muñoz Ramírez*

Una voz no invitada irrumpió en el escenario del pasado proceso electoral mexicano. Una mujer indígena, sanadora y defensora de la tierra conocida simplemente como Marichuy –como le dicen en su pueblo natal de Tuxpan, Jalisco– recorrió el país de norte a sur con mínimos recursos, sin promesas ni reparto de gorras y despensas para allegarse la simpatía de nadie, explicando en pueblos y plazas la propuesta que meses antes pusieron en sus manos diversas comunidades indígenas del país.

“No vamos al proceso electoral para ocupar un puesto, pero los pueblos ya se cansaron y queremos manifestar de esta forma todo lo que hay abajo. No nos han querido escuchar y por eso irrumpiremos

* Ejerce el periodismo desde hace 30 años. Su mayor experiencia se centra en comunidades indígenas y movimientos sociales en el mundo. Realiza docencia universitaria e imparte cursos de periodismo comunitario. Es fundadora y directora de Desinformémonos, espacio de comunicación global sobre movimientos sociales; asimismo, es columnista del periódico La Jornada donde mantiene el espacio sabatino “Los de abajo” y coeditora del suplemento “Ojarasca”, en el mismo periódico, dedicado a los movimientos y literatura indígenas. Es autora de los libros EZLN, el Fuego y la Palabra y Flores en el Desierto, Mujeres del Concejo Indígena de Gobierno. Además, es compiladora del libro Indignados y coordinadora y editora del libro Yo Soy 132 y Manual de Periodismo de abajo. Obtuvo, en México, el Premio Nacional de Periodismo en el año 2015, el Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí, otorgado por Prensa Latina en Cuba en 2005, y una mención honorífica en el premio Carlos Montemayor.

en su fiesta para hacernos visibles”¹⁶, así resumió María de Jesús Patricio la apuesta del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), anunciada por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y respaldada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La mujer nahua fue clara: su llamado era, es y será por la organización de los pueblos con el fin de “derribar el sistema capitalista que está acabando con las aguas, los árboles, los animales, el territorio y la tierra.”¹⁷

Los pueblos indígenas agrupados desde hace 23 años en el CNI se colocaron en el escenario político nacional con la única propuesta anticapitalista de todo el espectro electoral. Marichuy, la vocera elegida en asamblea por la red indígena, no alcanzó las 866 mil 593 firmas requeridas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para registrar su candidatura independiente, lo que significó que su nombre no apareciera en la boleta electoral. Un año antes, los pueblos vaticinaron este escenario y dejaron claro que el proceso de visibilización de las luchas era lo importante y el llamado a la organización el meollo del asunto. ¿Organizarse para qué? ¿Cómo? ¿Con quiénes? ¿Qué los llevó a tomar la decisión inédita, y, para muchos, contradictoria o confusa, de hacerse escuchar en la coyuntura electoral?

La primera confusión vino de quienes leyeron como una contradicción la participación en las elecciones de un movimiento opuesto a la democracia electoral y, en general, a la toma del poder. Después se dijo que la iniciativa era del EZLN y, por lo tanto, la candidatura sería una apuesta zapatista. La idea original, explicó la comandancia del Ejército Zapatista, fue de sus pueblos insurrectos, quienes la lanzaron al CNI y esta red de pueblos la hizo suya, no sin antes someterla a un debate acalorado en el que dejaron ver sus dudas.

En cuanto a la toma del poder, fueron enfáticos en que no se trató ni se trata de buscar acomodarse en la política tradicional, ni arriba ni debajo de este esquema. Sino de “desacomodar el tablero que tiene el poder ya diseñado, porque entre ellos ya tienen planeado quiénes quedan y al final no hay respuesta

o interés en proteger a las comunidades. Nos toca entrar en su fiesta para echárselas a perder, no para acabar como ellos”¹⁸ aclaró la vocera Marichuy.

“¿Y si ganan?” le preguntamos vía telefónica al inicio de la campaña de recolección de firmas. “No se trata de ganar o no”, respondió, “ellos tienen su cochinerito y por eso los pueblos pensamos que tenemos que hacer algo y que éste es el momento de irrumpir y de hacernos escuchar, que se sepa que lo que dicen no es lo que están haciendo en las comunidades.”¹⁹

Contra el racismo de arriba, la irreverencia de abajo

La iniciativa del CIG es, sin duda, una interpelación al racismo, la misoginia y el clasismo de la clase política dominante y de amplios sectores de la sociedad mexicana. Desdeñada por todos los partidos políticos, encontró en un sector del “izquierdismo” del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no sólo a un adversario, sino al protagonista de la más virulenta y discriminatoria campaña en su contra, de la cual el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no se deslindó ni antes ni después de las elecciones.

En las llamadas “benditas redes sociales”, como las calificó López Obrador, sus correligionarios encontraron el espacio para descalificar a Marichuy. En la columna “Los de abajo”, publicada semanalmente en el diario *La Jornada*, ofrecí una pequeña muestra de 100 comentarios racistas revisados sobre una sola nota referente a actividades de Marichuy; 58 provenían de perfiles reales de seguidores del entonces aspirante presidencial de Morena, quienes se refirieron a Marichuy como “sirvienta”, “tía de Marcos”, “analfabeta” y la conminaron a quedarse haciendo tortillas o lavando ropa en su casa. En otro rango, se esgrimió, sin ofrecer ningún argumento, la insulsa acusación de que la iniciativa era un invento del gobierno prisita y de Carlos Salinas de Gortari para dividir a la izquierda. Nadie de ellos, sin embargo, se pronunció cuando “el sistema” no permitió registrar la candidatura independiente, a pesar de que la vocera del CIG fue la única aspirante, según declaraciones del propio INE, que comprobó

16 Muñoz Ramírez, Gloria “Irrumpiremos en sus fiestas para hacernos visibles”, en Ojarasca, *La Jornada*. México, julio, 2017. <<http://ojarasca.jornada.com.mx/2017/07/07/201cirumpiremos-en-su-fiesta-para-hacernos-visibles201d-243-5538.html>>

17 *Idem.*

18 *Idem.*

19 *Idem.*

honestidad y legitimidad en la recopilación de firmas.

²⁰Silvia Rivera Cusicanqui, reconocida pensadora indígena boliviana, vislumbró que el CGI era el único que podía alborotar el sueño de los poderosos. Estas iniciativas, dijo, “pueden seducir y sanar almas, cuerpos, generar creatividad epistémica en chicos jóvenes de universidades, porque hay potencial para moverle el piso al poder. A mí me importa un huevo si una candidatura así le quita votos a otros, lo importante es que le suma votos a la alternativa y la diversifica. Se tiene que reconocer la alternativa, darle nombre y contenido, práctica, y eso veo que está muy avanzado en las comunidades de aquí”²¹

No sólo fue desdén hacia una posibilidad, sino miedo encubierto a un amplio sector de la población que blande el único proyecto de Nación que amenaza a los poderes. Desde que se abrió la posibilidad de la participación de una mujer indígena, la partidocracia desnudó su racismo y autoritarismo, y también su miedo al otro, y sobre todo, a la otra, a ese México pluricultural que sigue sin reconocerse, pues justo en sus territorios radican los bienes comunes naturales (agua, tierra, aire y subsuelo) que el neoliberalismo, encabezado por el partido que sea, ve únicamente como mercancías.

No fue el racismo el único contrasentido con el que se encontró la precampaña indígena, sino la homogeneidad de la partidocracia para salvaguardar los intereses empresariales nacionales y extranjeros dentro de los territorios indígenas. Posicionarse contra el despojo resultaba inadmisibles para ellos, pero tampoco deseaban que nadie lo hiciera ni los interpelara. Por eso no sorprendió que ninguno de los candidatos de la contienda electoral, incluyendo al vencedor, se pronunciara durante las campañas al respecto de los derechos y la cultura indígena; ni una sola mención merecieron durante los tres debates presidenciales organizados por el INE. Su ausencia dejó claro que el destino de los pueblos,

barrios, tribus y naciones indígenas afectadas por el despojo y la violencia no sólo no es parte del discurso político dominante, sino que representa una seria amenaza a sus intereses.

“En el panorama electoral no hay izquierda”, declaró María de Jesús Patricio, quien nunca llamó a la abstención, e hizo suyo el lema de “voten o no voten, organicense”. Un verdadero proyecto de izquierda, explicó, es “aquél que realmente derribe todas las estructuras impuestas desde arriba y que atienda a la voz de abajo y a la organización. Y que el que esté arriba obedezca al pueblo. Así de simple”²²

¿A qué país responde el Concejo Indígena de Gobierno?

Es enorme el historial de agravios contra los pueblos indígenas y sus territorios. Algunos ejemplos acercan respuestas al contexto en el que los pueblos agrupados en el CNI tomaron la decisión, junto al EZLN, de proponer una voz indígena en el tinglado electoral; entre estos agravios, encontramos los siguientes casos.

Más de 8 mil indígenas permanecen en la cárcel sin condena. No importa si son culpables o no de un acto delictivo. Estorban a un sistema que los quiere muertos, expulsados o tras las rejas si no se doblegan a sus intereses y entregan su vida y territorio. Megaproyectos como hidroeléctricas, minas, carreteras, desarrollos inmobiliarios, turísticos y eólicos, acueductos, gasoductos y un sinfín de planes perversos amenazan sus tierras y su cultura. Todos sin excepción llegan con el discurso del progreso, de la inyección de dinero y aumento de empleos. Si encuentran resistencia, la estrategia es dividir a la comunidad y las empresas reparten proyectos y dinero en efectivo. Y luego, también sin falta, llega la represión para quien insiste en no entregar el territorio. No son pocos los que se encuentran con la muerte en el camino. La cárcel es otro de los destinos.

En Tepoztlán, Morelos, el pueblo nahua lucha contra la ampliación de una carretera que divide sus centros

20 Muñoz Ramírez, Gloria, “Los motivos de Marichuy”, en *La Jornada*. México, 30 de diciembre, 2017. <<https://www.jornada.com.mx/2017/12/30/opinion/012o1pol>>

21 Muñoz Ramírez, Gloria y Hermann Bellinghausen, “Lo verdaderamente indio está dentro de nosotros: Silvia Rivera Cusicanqui”, en Ojarasca, *La Jornada*. México, noviembre, 2017. <<http://ojarasca.jornada.com.mx/2016/11/11/lo-verdaderamente-indio-esta-dentro-de-todos-nosotros-silvia-rivera-cusicanqui-9581.html>>

22 Muñoz Ramírez, Gloria, “Irrumpiremos en sus fiestas para hacernos visibles”, en Ojarasca, *La Jornada*. México, julio, 2017. <<http://ojarasca.jornada.com.mx/2017/07/07/2017irrupiremos-en-su-fiesta-para-hacernos-visibles201d-243-5538.html>>

sagrados y mutila la biodiversidad. Han probado las vías jurídicas y el diálogo, pero sólo consiguen parar la construcción cuando ponen sus cuerpos frente a la maquinaria. Lo mismo que hace la tribu yaquí de Sonora frente a la imposición de un gasoducto sobre sus tierras; ellos y ellas quitaron tubos y cables que la empresa IEnova instalaba ilegalmente para construir el gasoducto Agua Prieta. Nadie los consultó para ponerlos, a nadie consultaron para quitarlos.

Es común negarles la existencia a los pueblos indígenas cuando de imposiciones se trata, como a los mayas de Homún, en Yucatán, sobre cuyos cenotes pretenden levantar una mega granja con 49 mil cerdos, con lo que se destruiría medio ambiente y cultura al mismo tiempo. Les dijeron que no eran indios, y por lo tanto no tenían derecho a ser consultados. También les negaron su pasado a los rarámuri de la sierra de Chihuahua, en donde se talan clandestinamente sus bosques; ante el reclamo, las autoridades afirman que no hay registro oficial ni antecedentes de la existencia de la comunidad Bosque de San Elías Repechique. Así de simple.

En el informe de sipaz titulado “Pueblos Originarios: grandes desafíos y obstáculos para el disfrute efectivo de sus derechos”, presentado a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, en ocasión de su visita a México en noviembre del 2017, se sintetiza que “México goza de una gran riqueza y diversidad cultural y natural. Su población indígena representa el 10.1 por ciento de la población total del país y según la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi) existen 68 lenguas indígenas diferentes. Su territorio alberga entre el 60 y 70 por ciento de la diversidad biológica conocida del planeta. Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Yucatán y Michoacán son los estados que concentran la mayor biodiversidad y al mismo tiempo son los de mayor presencia indígena. Eso no es una coincidencia, sino que son los pueblos originarios los que han jugado un papel primordial en la conservación y protección de los ecosistemas”²³

Son los indígenas los guardianes del territorio que es de todos. Y cuidarlo los ha llevado a enfrentar una

embestida despiadada y un despojo similar al de la época de la Colonia. En 2017, en la sierra del norte de Jalisco, asesinaron a Miguel Vázquez Torres, de 40 años, presidente de bienes comunales de San Sebastián Teponahuaxtlán, municipio de Mezquitic, uno de los líderes indígenas que luchó por la restitución de tierras para su comunidad en el municipio nayarita de Huajimic. El mismo día asesinaron a su hermano Agustín, también comprometido con la defensa de su territorio. Y recientemente, en julio de 2018, fue secuestrado y luego asesinado Abraham Hernández González, miembro del Comité de Defensa de Derechos Indígenas (Codedi) en la población de Salchi, perteneciente a San Pedro Pochutla, Oaxaca; esto solo son tres ejemplos.

La prisión política ha sido el destino de decenas de luchadores indígenas. Dominga González, Teófilo Pérez, Pedro Sánchez, Rómulo Arias, Marco Antonio Pérez y Lorenzo Sánchez, nahuas de la comunidad de Tlanixco, municipio de Tenango del Valle, Estado de México, fueron condenados a 50 años de prisión –de los cuales ya han cumplido 15– acusados injustamente de la muerte del empresario Alejandro Isaak Basso, líder de los floricultores del municipio de Villa de Guerrero, a quienes la Comisión Nacional del Agua había concesionado el líquido contravinriendo el derecho preferente que los pueblos indígenas tienen para acceder a él. No lo mataron; la defensa del agua fue su delito.

Justo en Tlanixco, Marichuy se refirió a la comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán, donde el proceso de organización autónoma para defenderse del crimen organizado le ha costado la vida a 35 personas, además de seis desaparecidos. Ahí una bala del ejército mexicano asesinó al niño Hidelberto Reyes García.

Mujeres como la binnizá Bettina Cruz, la coca Rocío Moreno, la maya Sara López y la mazahua Magdalena García también han tenido la cárcel como respuesta a la defensa de su territorio. Bettina, por ser parte de la lucha contra los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec; Rocío, por luchar contra los invasores en Mezcala; Sara, por ser parte de la lucha contra las altas tarifas de la energía eléctrica. Magda se encontró con la represión contra el pueblo de San Salvador Atenco ejercida los días 3 y 4 de mayo de 2006, la cual tuvo un saldo de más de 200 personas detenidas (entre ellas diez menores de edad), de las cuales 146 fueron catalogadas como detenciones arbitrarias, por lo menos 26 mujeres

23 SIPAZ, “enfoque: Pueblos originarios – “grandes desafíos y obstáculos para el disfrute efectivo de sus derechos”, en Informa sipaz, vol. xxiii. México, 2018. <<http://www.sipaz.org/enfoque-pueblos-originarios-grandes-desafios-obstaculos-disfrute-efectivo-derechos/>>

que denunciaron tortura sexual por la policía, y, dos jóvenes asesinados.

Los 43 normalistas indígenas desaparecidos y los tres asesinados en Iguala, Guerrero, son otra deuda pendiente; así como el asesinato del maestro zapatista Galeano, perpetrado por paramilitares al servicio del Estado en la comunidad de La Realidad, Chiapas, donde, al igual que en el resto de las cinco regiones zapatistas, se mantiene la militarización más importante de todo el país, lo que no impidió el asesinato de 45 tzotziles de la organización civil Las Abejas en la comunidad de Acteal, ni los cuatro asesinatos en Viejo Velazco, también por grupos paramilitares.

La represión ha sido la respuesta a la organización, pues son los pueblos indígenas los que no se han quedado cruzados de brazos ante la embestida neoliberal. Por ello, de la defensa del territorio han pasado a la organización de diversos procesos de autonomía de los que, sin duda, las Juntas de Buen Gobierno zapatistas son el ejemplo más notable. El 6 de agosto de 2018 cumplieron 15 años los Caracoles, una experiencia inédita de autogobierno que ha resultado en escuelas prácticas de autonomía al interior de las comunidades y hacia el resto del mundo.

Cherán, comunidad purépecha de Michoacán, expulsó a los partidos políticos y al crimen organizado y es hoy otra posibilidad de democracia comunitaria. En Ostula, también en Michoacán, hicieron lo propio con la delincuencia y reivindicaron sus guardias tradicionales para la seguridad de la región, al igual que en Guerrero lo hace la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (crac-pc); y recientemente los pueblos del oriente del estado de Morelos se organizaron también contra quienes los extorsionan, secuestran y asesinan.

La lucha contra la minería ha tenido victorias. En Oaxaca, por ejemplo, en 2013, el pueblo zapoteco de Magdalena Teitipac, de los Valles Centrales, expulsó a Plata Real, filial de la canadiense Linear Gold Corporation, por contaminar los mantos freáticos durante sus trabajos de exploración. Lo mismo hizo el pueblo wixárika con la minera canadiense que amenazaba siete municipios del centro ceremonial de Wirikuta, en San Luis Potosí.

En otro lado del país, en Sonora, los yaquis de Lomas de Bacúm pararon el tramo del gasoducto que pasará por su comunidad; mientras continúan la lucha

contra el Acueducto Independencia que pretende llevarse su agua a Hermosillo para alimentar a las empresas. Mientras al sur, en Campeche y Yucatán, los mayas han ganado capítulos contra la siembra de semillas transgénicas.

Es larga la lista de dolores y resistencias que protagonizan las comunidades indígenas, pero la propuesta del cig no sólo responde a ellas y desde el principio interpeló a los olvidados de la Nación. México está sumido en la mayor crisis de derechos humanos de las últimas décadas: incremento de feminicidios (siete cada día); segundo lugar de asesinatos de periodistas en el mundo y el lugar más peligroso de América para ejercer el periodismo; asesinatos, secuestros y extorsiones a los migrantes centroamericanos en su paso por el país; más de 30 mil desapariciones en el marco de la guerra contra el narcotráfico y 200 mil muertos, entre otras calamidades que tienen en común el marco de la absoluta impunidad, y en no pocos casos la participación del Estado. Las reformas estructurales (energética y educativa), y la Ley de Seguridad Interior que legaliza la permanencia del ejército en las calles en labores de seguridad pública, son algunos de los grandes temas por los que también se pronunciaron los indígenas.

La democracia comunitaria

El proceso de elección del cig y de Marichuy como su vocera respondió a la lógica de la democracia comunitaria. Los integrantes del cni llevaron la propuesta a sus comunidades como resultado de su quinto congreso, celebrado a finales del 2016. En sus comunidades se analizó la iniciativa de participar en el proceso electoral con una candidata independiente que no buscaría el poder sino visibilizar la luchas. Una mayoría aceptó la propuesta y eligió, en asambleas o en la instancia de decisión de sus pueblos según sus usos y costumbres, al concejal y concejala que los representaría en la asamblea constitutiva, celebrada en Chiapas a puerta cerrada, en la que resultó electa María de Jesús Patricio como la mujer-vocera.

Se dijo desde un principio que se trataba de cerrar filas y pasar a la ofensiva para “desmontar el poder de arriba y reconstituirmos ya no sólo como pueblos, sino como país, desde abajo y a la izquierda”, y organizarse “para parar esta guerra”. La asamblea constitutiva se realizó en mayo de 2017 “por la

recuperación de los territorios invadidos o destruidos, por la presentación de los desaparecidos del país, por la libertad de todas y todos los presos políticos, por la verdad y la justicia para los asesinados, por la dignidad del campo y de la ciudad.”²⁴

En la asamblea constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno participaron pueblos, comunidades, naciones y tribus apache, amuzgo, chatino, chichimeca, chinanteco, chol, chontal de Oaxaca, chontal de Tabasco, coca, cuicateco, mestizo, hñähñü, ñathö, ñuhhü, ikoots, kumiai, lakota, mam, matlazinca, maya, mayo, mazahua, mazateco, me`phaa, mixe, mixe-popoluca, mixteco, mochó, nahua, nayeri, popoluca, purépecha, q`anjob`al, rarámuri, tének, tepehua, tlahuica, tohono odham, tojolabal, totonaco, triqui, tseltal, tsotsil, wixárika, xi`iuy, yaqui, binniza, zoque, akimel, o`otham y comkaac.

El filósofo Luis Villoro señala en su ensayo “Un concepto de Revolución” que en las Juntas de Buen Gobierno zapatistas rige una democracia participativa, en la que “los representantes, hombres y mujeres, son electos por toda la comunidad, con independencia del poder nacional central. Los representantes funcionan de manera rotativa, revocable y están sujetos a la rendición de cuentas periódicamente. Esa es la democracia directa, más allá de la “partidocracia”²⁵ Este procedimiento rige al interior del CGI, con la forma de organización de cada comunidad o pueblo indígena que lo conforma.

¿Qué sigue?

El Concejo Indígena de Gobierno y su vocera Marichuy no obtuvieron el registro de la candidatura independiente, a pesar de haber sido oficialmente la única fórmula honesta de las que aspiraron al registro de una candidatura independiente; esto se debió no sólo al racismo imperante, sino también a su oposición a la destrucción capitalista. “Los pueblos originarios y quienes caminamos abajo y a la

izquierda no cabemos en su juego; no por nuestro color, nuestra raza, nuestra clase, nuestra edad, nuestra cultura, nuestro género, nuestro pensamiento, nuestro corazón, sino porque somos uno con la madre tierra y nuestra lucha es porque no se convierta todo en una mercancía, pues sería la destrucción de todo, empezando por la de nosotros como pueblos”; dijeron al tomar el acuerdo de “caminar construyendo las claves para sanar el mundo.”²⁶ El 1 de julio llegó el triunfo de Andrés Manuel López Obrador como el próximo presidente de México; además Morena obtuvo la mayoría en las dos Cámaras. El tamaño de la celebración es del tamaño de la expectativa de diversos sectores de la sociedad, aunque no de los zapatistas, quienes de inmediato tomaron distancia del triunfo y se posicionaron con la siguiente frase: “podrán cambiar el capataz, los mayordomos y caporales, pero el finquero sigue siendo el mismo.”²⁷

Más adelante, los días 3, 4 y 5 de agosto, se realizó en territorio zapatista el Encuentro de redes de apoyo al Concejo Indígena de Gobierno, al que fueron convocados todas las personas y colectivos que se adhirieron a su propuesta tanto en la recaudación de firmas para su registro, como en construcción política desde abajo a través de este proceso. Al final del encuentro, los subcomandantes Moisés y Galeano delinearon los siguientes pasos, al proponer la construcción de un Concejo que no sólo incluya las luchas de los indígenas, “sino que incorpore las luchas de todos los oprimidos, de los desechables, de las desaparecidas y asesinadas, de los presos políticos, de las mujeres agredidas, de la niñez prostituida, de los calendarios y geografías que trazan el mapa imposible para las leyes de la probabilidad de las encuestas y las votaciones: el mapa contemporáneo de las rebeldías y las resistencias en todo el planeta.”²⁸

24 Maldonado, Issa, “En mayo, elegirán a candidata indígena por la presidencia: cni”, en *Milenio*. México, 4 de abril, 2017. <<http://www.milenio.com/estados/mayo-elegiran-candidata-indigena-presidencia-cni>>

25 Villoro, Luis, “El concepto de revolución”, en *Círculo de estudios de filosofía mexicana*. México, noviembre, 2010. <<https://filosofiamexicana.org/2010/11/19/luis-villoro-el-concepto-de-revolucion/>>

26 Congreso Nacional Indígena, “Falta lo que falta”. México, 2 de abril, 2018. <<https://www.congresonacionalindigena.org/2018/05/02/falta-lo-falta/>>

27 Mandujano, Isaín, “El ezln pone distancia con amlo: podrá cambiar el capataz, pero el finquero sigue siendo el mismo”, en *Proceso*. México, 6 de julio, 2018. <<https://www.proceso.com.mx/541872/el-ezln-pone-distancia-con-amlo-podra-cambiar-el-capataz-pero-el-finquero-sigue-siendo-el-mismo>>

28 “Palabras del Sub Moisés y el Sub Galenia en la clausura del encuentro de redes de apoyo al #CIG y a su vocera en el caracol de Morelia, Chiapas, el 5 de

Con la solicitud de que las redes de apoyo se llevaran la propuesta a consulta, los representantes zapatistas explicaron que se trataría de que el Concejo dejara de ser exclusivamente indígena y dejara de ser sólo nacional.

1. La propuesta a consultar consta de siete puntos:
2. Refrendar nuestro apoyo al Congreso Nacional Indígena (CNI) y al Concejo Indígena de Gobierno (CIG).
3. Crear y mantener canales de comunicación abiertos y transparentes entre quienes nos conocimos en el andar del CIG y su vocera.
4. Iniciar o continuar el análisis-valoración de la realidad en la que nos movemos, haciendo y compartiendo dichos análisis y valoraciones, así como las propuestas de acción coordinada.4.- Proponer el desdoblamiento de las redes de apoyo al CIG para, sin dejar el apoyo a los pueblos originarios, abrir el corazón a las rebeldías y resistencias que emergen y perseveran en donde cada quien se mueve, en el campo y la ciudad, sin importar las fronteras.
5. Iniciar o continuar la lucha que apunte a enriquecer las demandas y el carácter del CIG de modo que vaya más allá de los pueblos originarios e incorpore a trabajadores del campo y la ciudad y a los desechables que tienen historia y luchas propias, es decir, identidad.
6. Iniciar o continuar en el análisis y discusión que apunte al nacimiento de una coordinación o federación de redes que evite el mando centralizado y vertical, y que no escatime el apoyo solidario y la hermandad entre quienes la forman.
7. Celebrar una reunión internacional de redes.

Y reunirse en diciembre de 2018 para analizar junto a las propuestas del CNI, CGI y de su vocera los próximos pasos.

agosto de 2018”, en *Zapateando*. México, 7 de agosto, 2018. <<https://zapateando.wordpress.com/2018/08/07/palabras-del-sub-moises-y-el-sub-galeano-en-la-clausura-del-encuentro-de-redes-de-apoyo-al-cig-y-su-vocera-en-el-caracol-de-morelia-chiapas-el-5-de-agosto-de-2018-ezln-cni-cih-marichuy/>>





Despojo y resistencia social en México: balance y perspectivas ante un nuevo gobierno

Carlos Andrés Rodríguez Wallenius*

Introducción

En años recientes se ha posicionado en la agenda pública de nuestro país el rechazo a los proyectos extractivistas y de despojo que se han extendido por todo México. Esto ha sido denunciado por movimientos sociales mediante una amplia gama de redes y frentes regionales y nacionales, como la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio; también ha sido denunciado por académicos, como lo muestran los recientes trabajos de Armando Bartra, Víctor Toledo y Mina Lorena Navarro; además, han participado agrupaciones políticas, como la plataforma que impulsó la candidatura independiente del Concejo Indígena de Gobierno (CIG). Todos ellos han denunciado las formas de expropiación de territorios y bienes naturales, así como la devastación ambiental provocada por proyectos económicos y de infraestructura en las comunidades campesinas e indígenas.

* Profesor de la UAM Xochimilco, en el Departamento de Producción Económica y del Posgrado en Desarrollo Rural. Actualmente es Coordinador de la Maestría en Sociedades Sustentables. Doctorado en Ciencias Sociales y maestría en Desarrollo Rural por la UAM-Xochimilco. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) con nivel I. Es socio fundador de la Red de Investigadores sobre Gobiernos Locales (IGLOM), miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales (AMER), del que fue integrante del Comité Ejecutivo Nacional 2015-2017. Fue coordinador del Grupo de Trabajo "Desarrollo Rural: Disputas territoriales, campesinos y decolonialidad" de Clacso y Presidente del Comité Organizador del IX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural 2014. Ha escrito más de 60 artículos en revistas y libros sobre movimientos sociales, defensa comunitaria del territorio y desarrollo local. Además de impartir conferencias en México y América Latina sobre esos mismos temas.

No es para menos este rechazo, pues una amplia gama de bienes naturales y territoriales –agua, bosques, suelo, minerales, paisajes, fuentes de energía– que están bajo el resguardo de los pueblos, han sido sometidos a procesos de apropiación por parte de empresas y gobiernos, lo que les permite obtener elevadas ganancias a las corporaciones cuando esos bienes son incorporados como mercancías en los mercados de productos o en el sistema financiero.

La intensificación de estos procesos constituye una de las mayores dificultades en el campo mexicano, ya que ha generado cerca de 500 conflictos socioterritoriales en los últimos años; esto es consecuencia, sobre todo, de la dinámica de despojo y mercantilización de los bienes naturales y comunitarios, que implica separar a los pueblos campesinos e indígenas de sus medios de sustento y formas de vida. El modelo extractivista y de despojo aumenta las ganancias empresariales, pero empobrece y margina las formas de vida de los pueblos; ambos modelos son contrapuestos y excluyentes, por lo que no pueden coexistir: las actividades de despojo destruyen las posibilidades ambientales, de sustento, de producción y de organización en los espacios rurales donde se instalan como consecuencia de su agresivo impacto al sustraer, contaminar o destruir suelos, aguas, paisajes, bosques y selvas de los territorios campesinos, lo que genera distintas formas de conflicto y resistencia de dichas poblaciones con el fin de evitar ser despojadas y explotadas.

Las modalidades de despojo se expresan en unidades habitacionales de las periferias urbanas; en la apropiación y privatización del agua; en la extracción minera; en los desarrollos turísticos de enclave; en los sistemas de plantaciones de monocultivos; en la extracción de hidrocarburos; y en la realización de megaproyectos de obras para infraestructura, entre otros. Todos estos se basan en gran medida en el despojo para sustentar los negocios de las empresas: la expoliación de suelos y agua sirve para suministrar recursos a las ciudades; la de minerales y productos agroforestales para abastecer a la industria; la de paisajes y playas provee bienes al turismo; y la de terrenos y ríos para realizar grandes obras y proyectos.

En este trabajo vamos a trazar un panorama de los años recientes sobre los principales impactos de los proyectos de despojo y extractivistas en México a través de actividades como la minería, las plantaciones forestales comerciales, los desarrollos turís-

ticos, los megaproyectos, la apropiación de agua, así como las respuestas sociales que enfrentan a dichos proyectos. También se ubicarán los vínculos que tienen las actividades de despojo con las Zonas Económicas Especiales (ZEE) que permiten fortalecer los procesos de acumulación derivados de las actividades extractivistas. Finalmente se hace un acercamiento a las propuestas que tiene el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en términos de continuidades y rupturas con los modelos de despojo.

Breve balance de los procesos de despojo en México

Desde inicios del siglo XXI se incrementaron los proyectos extractivistas y de despojo debido al aumento en la demanda de materias primas (minerales, metales, gas, petróleo, alimentos, madera) por parte de las economías desarrolladas (Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón) y emergentes (China, India, Corea del Sur, Rusia; esto desató una agresiva búsqueda de bienes naturales para aprovechar el boom de los altos precios. Este proceso fue interrumpido parcialmente por la crisis financiera del 2007-2008 y, a partir del 2012, por la disminución de los precios de los hidrocarburos y metales. A pesar de ello, los distintos países de América Latina han mantenido con firmeza las actividades extractivas como una de las formas dominantes de sus economías.

En México los impactos de las actividades extractivas fueron particularmente intensos y violentos debido a la construcción histórica del espacio rural, que fue moldeado por la revolución campesina de 1910-1919 y por reparto agrario, posteriormente. Esto hizo que más de la mitad del territorio mexicano estuviera bajo propiedad social en las figuras de ejido (por dotación de tierras) y comunidades agrarias (por restitución de terrenos a los pueblos originarios). Dicha situación ha provocado que, en la actualidad, la conformación rural de México tenga una importante presencia campesina e indígena: un 20% de la población vive en zonas rurales (26 millones de personas aproximadamente) que incluyen a más de 150 mil pequeñas localidades, pueblos y barrios, en los que habitan 64 grupos étnicos, afrodescendientes y mestizos, responsables de la mitad del territorio nacional; asimismo, son herederos y custodios de conocimientos y prácticas que enriquecen y

resguardan una de las mayores variedades de fauna y flora que habitan en bosques, selvas, ríos y litorales.

Esta caracterización de la vida campesina nos permite ir más allá de la tenencia de la tierra y observar la importancia del territorio, pues buena parte de la población rural considera la tierra no sólo como la superficie de suelo donde siembran y producen, sino como el espacio en que habitan en comunidad y en el que, además del suelo, importan las fuentes de agua, los bosques y selvas, las montañas y la cultura, los cuales son esenciales para continuar sus formas de vida y organización.

Además, los bienes naturales en territorios campesinos son muy importantes; por ejemplo, México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, de la cual la mayor parte está resguardada en tierras campesinas e indígenas, pues cerca del 50% de selvas húmedas y bosques de niebla, así como el 25% de los bosque templados se encuentran en ejidos y comunidades que, pese a las tentaciones propias y externas, han podido conservar gracias a los diferentes formas de uso y cuidado de su entorno natural. Esto les permite a las poblaciones utilizar cerca de mil especies y sus variantes para su alimentación, además de 3 mil plantas con uso medicinal y 5 mil variedades de flora para usos culturales. Baste recordar que 15.4% del sistema alimentario mundial proviene de las plantas domesticadas en Mesoamérica y su germoplasma se encuentra, en gran medida, en esta región. Otro dato interesante es que el 21.69% del agua nacional se genera en territorios indígenas, por lo que son espacios fundamentales para la producción y conservación del agua, que también necesitan las ciudades e industrias.²⁹

Así, al tomar en un sentido más amplio la tierra –es decir, como territorio–, podemos observar que en los últimos 20 años lo que se ha desarrollado en el país es un enorme y violento proceso de despojo, privatización y apropiación de los elementos que constituyen al territorio, pues las tierras campesinas e indígenas contienen bienes naturales que son de creciente interés para empresas y gobiernos: nos referimos al agua, al suelo, a los minerales, a los bosques, a las selvas y a los paisajes.

29 Para mayor información, véase Boege, Eckart, *El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México*. México, Instituto Nacional de Antropología e Historia-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2008.

Además, el proceso de despojo fue facilitado por reformas estructurales, como las realizadas en 1992 al artículo 27 constitucional y la Ley Agraria; estos cambios permitieron la renta y compra-venta de las tierras ejidales y comunales. Junto con estas modificaciones, ese mismo año se elaboró una nueva Ley Minera y La Ley de Aguas Nacionales que abrieron esos sectores al capital privado y generaron un mercado de concesiones privadas. Asimismo, tanto la Ley de Inversión Extranjera (modificada en 1996) como el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, acentuó el control de las transnacionales sobre la economía, así como la privatización de empresas y bienes nacionales.

El proceso de apropiación de los territorios en México se expresa en varias formas: las concesiones mineras de los subsuelos; la venta o renta de tierras para plantaciones forestales; la privatización de tierras de playa para los desarrollos turísticos; la expropiación de suelos para megaproyectos de infraestructura; la apropiación de fuentes de agua de las comunidades, etcétera.

El caso de las concesiones mineras es el más extremo de las formas apropiación territorial, pues a partir de una legislación que abrió dicho sector a las empresas extranjeras, se le dio preferencia a las actividades extractivas sobre cualquier otro uso del terreno y se incrementó la duración de las concesiones hasta por un periodo de 100 años, lo que provocó un incremento de solicitudes de concesiones que, para el 2017, amparaban un total de 32 millones de hectáreas (el 16% del territorio nacional); un poco más del 50% de ellas están debajo de tierras ejidales y comunales.

Los concesionarios mineros son los nuevos latifundistas, pues la superficie que amparan los títulos es enorme. Empresas como Industrias Peñoles y Fresnillo del Grupo BAL tiene 2.8 millones de hectáreas, Minera Frisco del multimillonario Carlos Slim, 889 mil hectáreas, y Grupo México cuenta con 607 mil hectáreas.

El intenso otorgamiento de concesiones impulsó la realización de poco más de mil proyectos mineros, que en su mayoría están en fase de exploración, mientras que 102 ya están en producción. Del total de proyectos, 870 son de empresas extranjeras, sobre todo canadienses, aunque también hay una participación importante de empresas mexicanas. En cada proyecto, las mineras presionan a los due-

ños de las tierras para que se las renten, de manera que puedan realizar las obras de extracción de los minerales, lo que implica una gran cantidad de terrenos que son devastados y contaminados por la actividad minera. Informes recientes han mostrado las consecuencias de la actividad minera por el acaparamiento, sobreexplotación y contaminación de fuentes de agua que requiere para sus diferentes etapas de producción; esa misma agua es la que necesitan los campesinos e indígenas para producir, alimentarse y cuidar de su salud. Esto se refleja en que 417 mineras inscritas en el Registro Público de Derechos de Agua tienen asignados 1, 036 títulos de aprovechamiento de agua, que representan un volumen de cerca de 450 millones de metros cúbicos anuales de este líquido, lo que hace a la minería una de las mayores consumidoras de agua en el país.³⁰

Por otro lado, las políticas gubernamentales han impulsado una ofensiva territorial mediante la promoción de plantaciones forestales de carácter comercial en las zonas del trópico húmedo, para aprovechar las condiciones de suelo, clima y agua necesarias para la siembra de monocultivos como el eucalipto, la palma de aceite, la teca y el pino. Esta estrategia se respalda en el aumento de la extensión de la pequeña propiedad forestal hasta 800 hectáreas para un propietario individual y, mediante sociedades mercantiles, hasta 20 mil hectáreas, lo que convierte a las sociedades forestales en las propietarias de suelo más grandes de México. Además, en las plantaciones comerciales —como también sucede en la minería o en los parques eólicos para la generación de electricidad— la Ley Agraria permite la renta de terrenos de ejidatarios a personas físicas y a empresas con contratos de hasta 30 años, los cuales pueden ser renovados otro tanto, lo que ha hecho que cerca del 50% de plantaciones empresariales se realicen en terrenos arrendados a campesinos, con mecanismos de subordinación, como los Contratos de Aparcería Rural que operan a favor de las corporaciones forestales. Todo ello se expresa en el incremento en la superficie forestal de carácter comercial, que pasó de 100 mil hectáreas en el 2006 a 269, 661 en el 2016. Sólo en Chiapas hay 52 mil hectáreas sembradas de palma de aceite.

En el caso de las tierras campesinas y de pesca-

dores en zonas de playa, también se muestran las formas de despojo por parte de empresas turísticas e inmobiliarias. Comunidades de los litorales del Pacífico (en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Guerrero y Oaxaca) y en el Caribe mexicano (en los estados de Quintana Roo y Yucatán) han sufrido un constante proceso de apropiación de sus tierras —ya sea por decretos de expropiación o por compra— para ser convertidas en zonas turísticas. Una muestra de este proceso es el proyecto de la Riviera Maya, que desde la década de 1990 fue apropiándose de 130 km de litorales al sur de la zona turística de Cancún, tierras pertenecientes a comunidades mayas, con el fin de convertirlos en espacios para las empresas hoteleras y turísticas. Actualmente, Cancún y la Riviera Maya tienen más de 52 mil habitaciones y cerca de 900 hoteles.

Otro ejemplo de las jugosas ganancias que son producto del despojo mediante el turismo lo tenemos en Puerto Peñasco, un desarrollo impulsado por el gobierno de Sonora que promovió, en 1996, la expropiación de las tierras del ejido Miramar, lo que le costó a la federación 0.50 pesos el metro cuadrado. En cambio, en el 2017, ese mismo suelo, después de la puesta en marcha de la infraestructura urbana y la construcción de hoteles, estaba a la venta en 1, 500 pesos el metro cuadrado.

También existe el despojo de terrenos rurales en las zonas donde se construyen megaproyectos de infraestructura, que incluyen sistemas carreteros y autopistas, presas hidroeléctricas y represas, aeropuertos, puertos marítimos y puertos secos, termoeléctricas, petroquímicas, parques eólicos o reordenamientos urbanos, que son impulsados por los gobiernos en alianza con empresas constructoras. Estos proyectos incluyen los suelos para las obras, y para las distintas construcciones y equipamientos (tuberías, torres de transmisión, cableado, subestaciones de servicio, etcétera). Los parques eólicos para la generación de electricidad en el Istmo de Tehuantepec son muestra de esta situación, pues la superficie que utilizan las concesiones dadas para las empresas eólicas —en su mayor parte de capital español— rebasa las 40 mil hectáreas, las cuales han sido rentadas a las poblaciones indígenas de la zona.

Merece especial atención la tendencia sobre la mercantilización del agua, que es uno de los elementos centrales del territorio y de la vida campesina; también es un insumo esencial para uno de los negocios más rentables de la actualidad: los

30 Para más detalles, véase Llano, Manuel, *Concesiones de agua para las mineras*. México, Fundación Heinrich Boll y Cartocítica, 2016.

sistemas privatizados de abasto de agua potable y el creciente consumo de agua embotellada. Estas áreas representan una de las vertientes más dinámicas de la economía. Por ejemplo, las ventas anuales de agua embotellada en México ascienden a 40 mil millones de pesos, lo que representa un consumo *per capita* de 224 litros de agua al año, que nos coloca como el primer consumidor mundial. Los requerimientos del líquido vital para ser comercializados están provocando que las empresas controlen las concesiones de agua a partir de las fuentes de abastecimiento (manantiales, arroyos y pozos) que están en manos de la población campesina, lo que provoca una serie relevante de disputas entre empresas, gobiernos y campesinos: hasta la fecha hay más de 150 conflictos que involucran casi todas las zonas cercanas a las ciudades grandes y medianas.

En fin, visto en conjunto, las poblaciones campesinas, indígenas y de pequeños agricultores han mantenido la propiedad y posesión de sus tierras y fuentes de agua, pero enfrentan un agresivo proceso de apropiación de los bienes naturales que están en sus territorios. El problema, por el momento, no es el acaparamiento de la tierra, sino el control que empresas y gobiernos quieren tener sobre el territorio. Este panorama da una idea de la conflictividad social creciente en el campo mexicano, donde los pueblos y las comunidades campesinas han estado resistiendo a distintas ofensivas y acciones de empresas y gobiernos que buscan imponerles en sus territorios proyectos extractivistas que los despojan de su tierra y destruyen sus formas de vida.

Una ramificación del despojo: las Zonas Económicas Especiales

Una de las características de los procesos de despojo es que sus ganancias tienen que ser incorporadas en los mercados de productos o en el sistema financiero para mantener la dinámica de acumulación capitalista. Con esta idea en mente, el gobierno de Enrique Peña Nieto decretó en 2017 el establecimiento de Zonas Económicas Especiales (ZEE) como uno de los mecanismos para continuar con la generación de utilidades para las empresas.

Las ZEE son espacios promovidos por el gobierno federal que tienen las condiciones de infraestructura, servicios, transporte y de energía que permiten

concentrar actividades de transformación de bienes naturales y, con esto, facilitar la salida de materias primas extraídas en la región sureste del país (hidrocarburos, minerales, productos agropecuarios). Son áreas en las que se instalan parques industriales que aglomeran empresas maquiladoras, agroindustriales y empacadoras, que les dan un valor agregado a los bienes que son comercializados a través de ferrocarriles, autopistas, puertos y aeropuertos que encaminan la mercancía a los mercados asiáticos, europeos o norteamericanos.

Para atraer a las empresas, estos espacios ofrecen facilidades como exenciones de impuestos (por ejemplo, el Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto Predial o los impuestos a la importación); mano de obra barata —no sólo porque México tiene uno de los salarios mínimos más bajos de América Latina, sino porque se aplicarán los subsidios gubernamentales del Programa de Primer Empleo y el Programa de Empleo Temporal—; condiciones óptimas de infraestructura, servicios, transporte, comunicación y de energía —mediante gasoductos, parques eólicos, hidroeléctricas—; además de seguir aprovechando las laxas normatividades ambientales que imperan en el país. Es decir, las ZEE son un mecanismo que intensifica la extracción y el despojo de bienes naturales, a la vez que incentiva la explotación del trabajo vivo y se otorgan facilidades para contaminar al ambiente, lo que da a las empresas condiciones excepcionales para incrementar su tasa de ganancia a cambio de mayor pobreza, exclusión y devastación para los habitantes.

Los distintos proyectos que se establecerán en Puerto Chiapas, en Salina Cruz, Oaxaca, en Lázaro Cárdenas, Michoacán y en Coatzacoalcos, Veracruz, requieren de grandes extensiones de terrenos en los que se instalarán no sólo los parques industriales, bodegas, instalaciones logísticas e infraestructura, sino que también se asentarán unidades habitacionales para los trabajadores y obreros, así como áreas de servicios y de comercio. Así, las tierras necesarias serán parte de un nuevo proceso de despojo a partir de la apropiación de los terrenos ejidales y comunitarios de las áreas de influencia y dentro de los polígonos definidos para cada zona económica especial. Para esto pueden operar mecanismos de mercado —presionando a los ejidatarios a vender sus tierras—; expropiaciones por declaratorias de utilidad pública —para la construcción, manteni-

miento, ampliación y desarrollo de las zonas, así como para dotar de servicios para su operación—; o por arrendamiento temporal de las tierras y servidumbre legal, según se establece en las leyes de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica, producto de la reforma energética del 2013.

Los primeros visos de la política de AMLO

Existe una gran expectativa sobre el tipo de política económica que impulsará el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a partir del 1 de diciembre de 2018. Los primeros referentes son las propuestas realizadas en la campaña electoral que se han ido delimitando en el largo periodo de transición después del triunfo electoral.

Ya aparecieron las primeras críticas a la orientación general de sus proyectos, sobre todo por el parecido con las políticas neodesarrollistas que llevaron al cabo algunos gobiernos progresistas en países sudamericanos (como Ecuador, Brasil, Argentina, Venezuela), donde sostuvieron sus políticas sociales redistributivas basadas en el incremento del extractivismo y de la producción de materias primas, las cuales fueron gravadas con más impuestos para financiar los programas sociales. Sin embargo, esta situación fortaleció la reprimarización de sus economías y la dependencia de las actividades extractivas en un periodo de bajos precios y demanda.³¹

En este contexto, el equipo de AMLO ha dado señales contradictorias; por ejemplo, a finales de julio de 2018 se declaró la intención de poner fin al uso de la práctica de la fractura hidráulica (*fracking*) para la extracción de gas y petróleo en México. En el caso de la minería extractiva se ha insistido en mantenerla, pero con una mayor supervisión de sus impactos al ambiente y al territorio campesino para que no se destruyan, además de asegurar que los impuestos por las utilidades mineras lleguen a los pueblos donde se extraen los minerales.

31 Para una discusión más amplia sobre esta perspectiva, véase Gudynas, Eduardo, "Extracciones, extractivismos y extracciones. Un marco conceptual sobre la apropiación de recursos naturales", en *Observatorio del Desarrollo*, CLAES, núm. 18. Uruguay, [s. e.], 2013, pp. 1-18. <<http://ambiental.net/wp-content/uploads/2015/12/GudynasApropiacionExtractivismo-ExtraheccionesOdeD2013.pdf>>

Sobre megaproyectos, la posición también es ambigua, pues pasó de criticar fuertemente desde su campaña la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, hasta los últimos anuncios de revisar la posibilidad de que sea construido si el financiamiento principal es privado, junto con una consulta para octubre del 2018.

Sin embargo, el anuncio de otros megaproyectos puede consolidar políticas desarrollistas y de modernización, en particular los proyectos de desarrollo que se proponen para la región sur-sureste del país, como el tren turístico transpeninsular que pasará por terrenos de poblaciones indígenas y campesinas del sureste para unir Palenque con Cancún, lo que implicará expropiación de terrenos y la tala de selvas para la construcción de las vías de tren. Esto puede incentivar procesos de despojo, además de apuntalar y legitimar un sistema de turismo de enclave que se basa en la apropiación de tierras, playas y paisajes como son los desarrollos turísticos del caribe mexicano.

El mismo sentido tendría el Corredor Transísmico de Tehuantepec —un viejo proyecto modernizador— que conectaría el Pacífico con el Golfo de México y que ahora fortalecería los proyectos de las ZEE de Salina Cruz y Coatzacoalcos, lo que incluye la recuperación y modernización de la vía férrea entre las dos localidades y la construcción de los parques industriales, así como dotación de infraestructura.

El proyecto de sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables merece una mención especial, pues el modelo que ha operado actualmente tiene como base las plantaciones forestales comerciales, que son esencialmente empresariales y requieren de grandes extensiones de tierra, las cuales, hasta ahora, se obtienen mediante la renta de terrenos ejidales en condiciones asimétricas que provocan un impacto ambiental importante al privilegiar especies exógenas (eucalipto, teca, pino, palma africana) y devastan selvas para sembrar monocultivos. El nuevo proyecto tendrá que definir el papel de los campesinos y pueblos originarios en la siembra, cuidado y comercialización de especies frutales y maderables para no caer en las garras de las grandes empresas.

Finalmente está el proyecto de aumentar la explotación petrolera de 1.9 millones de barriles diarios a 2.5 millones, es decir, un aumento del 30%. A este respecto aparecen los nubarrones neoextractivistas

sobre basar el crecimiento económico a partir de la extracción de bienes naturales bajo los esquemas definidos en la reforma energética del 2013, que le quitaron el control productivo a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y trasladaron las ventajas económicas de la explotación, procesamiento y comercialización petrolera a las corporaciones privadas.

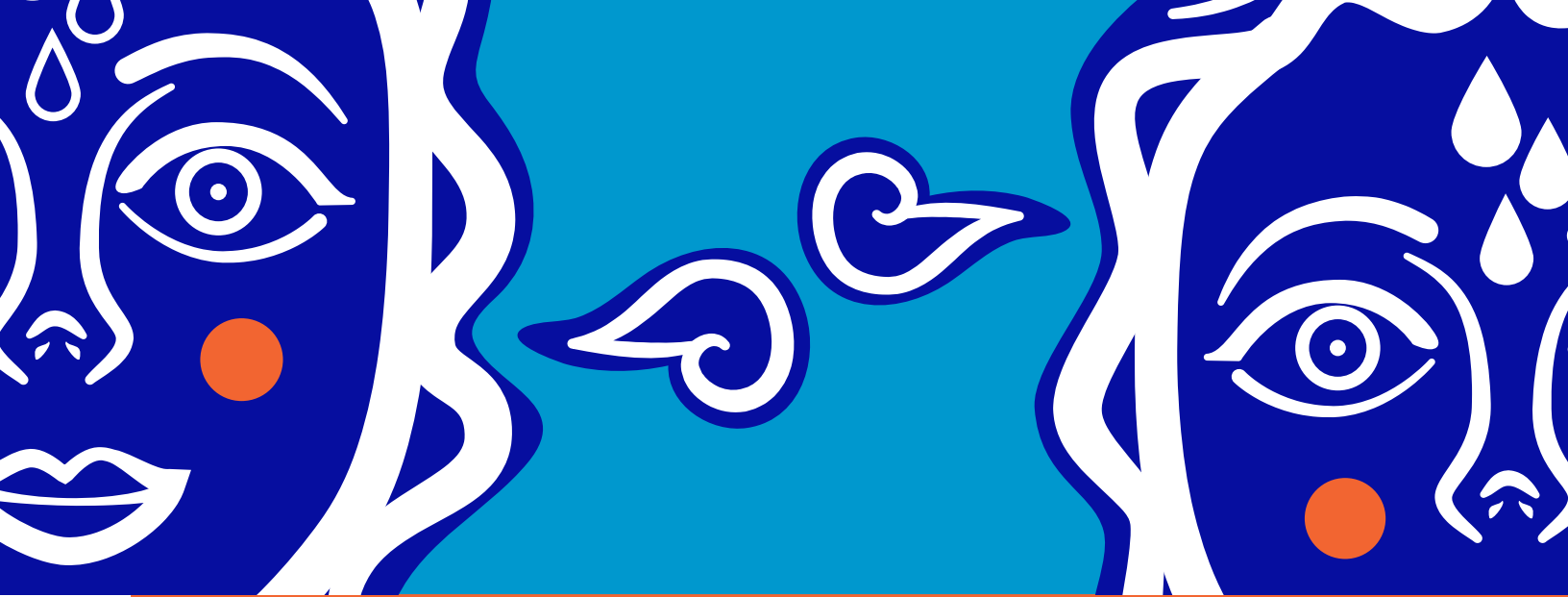
Conclusiones y perspectivas

La defensa del territorio y la lucha social contra las actividades extractivistas colocaron en la agenda nacional un claro rechazo a los proyectos mineros, turísticos, de infraestructura, energéticos y de privatización del agua que despojan de los bienes naturales a las comunidades, a la vez que destruyen su hábitat.

Lo que se critica es un modelo de despojo que se ha impulsado y promovido por el gobierno mexicano y las grandes empresas durante los últimos 20 años, y que, en dicho periodo, ha lastimado a muchas poblaciones rurales al privilegiar los intereses corporativos para apropiarse de sus bienes naturales y territorios, y así obtener grandes ganancias; éste es un modelo que genera pobreza, exclusión y desplazamiento de los pueblos al destruir sus medios de vida.

Este proceso se quiso apuntalar al final del sexenio de Enrique Peña Nieto con la implementación de las ZEE en algunas regiones estratégicas del sur y sureste del país, las cuales profundizarán los procesos extractivistas vinculándolos con la explotación laboral en empresas maquiladoras y agroindustriales.

Sin embargo, parte de la votación del 1 de julio expresó el descontento que existe en muchas zonas del país a los efectos e impactos de los proyectos de despojo que habían sido promovidos y protegidos por el gobierno actual y su partido político, el Partido Revolucionario Institucional. Esto plantea un reto para el nuevo gobierno que encabezará López Obrador y la mayoría parlamentaria que tiene su partido en ambas cámaras legislativas: el de modificar las bases legales y políticas que fomentan las actividades extractivas y que se proteja a los medios de sustento y de vida en los miles de comunidades campesinas e indígenas del país, o que se mantengan las condiciones actuales de acumulación y despojo, arreglando en lo posible los daños e impactos que causa en las poblaciones rurales.



Humanidad, dignidad, libertad y el poder de las mujeres

Cirenia Celestino Ortega*

El 1 de julio triunfó la izquierda, una izquierda construida desde las mujeres y, por ello, con las gafas feministas más puestas que nunca. El movimiento amplio de mujeres y feministas se ha manifestado en distintos espacios en el ámbito nacional e internacional; éste ha llamado a que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, guíe su política para combatir de forma decidida la violencia contra las mujeres y las niñas, la cual se expresa de múltiples maneras en todos los ámbitos de la vida; asimismo, ha llamado a implementar medidas que coadyuven al diseño y aplicación efectiva de una política nacional de igualdad de género en los próximos seis años.

La alta presencia femenina en las elecciones de 2018 es el resultado del trabajo de legisladoras y defensoras de los derechos político-electorales de las mujeres, que por años abogaron por la representación equitativa en el Congreso de la Unión. Esta demanda comenzó a concretarse en 1992 con la introducción

de las cuotas de género (60-40) y evolucionó en 2014 a la paridad de género, introducida a partir de la reforma constitucional político-electoral que obliga a los partidos a postular 50% de mujeres a las candidaturas de diputaciones federales y senadurías.

También se perfila desde ahora que la Ixlv Legislatura de la Cámara de Diputados (que toma posesión en septiembre de 2018 y estará en funciones hasta 2021) tendrá el mayor número de mujeres en la historia de México, pues contará con 246 legisladoras y 254 legisladores.

Además, por primera vez, México tendrá un gabinete presidencial paritario en el que las mujeres encabezarán ocho secretarías decisivas del Estado. En la Secretaría de Gobernación tomará el mando Olga Sánchez Cordero; en la Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín; en la Secretaría de Energía, Norma Rocío Nahle García; en la Secretaría de Desarrollo Social, María Luisa Albores González; en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde; en la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero; en la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros; y en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco Ortiz Mena. De entre ellas, cabe destacar que Sánchez Cordero es una aliada de los derechos de las mujeres. Como ministra

* Periodista y activista por los derechos humanos de las mujeres. Actualmente es Coordinadora del Área de Estrategias de Comunicación y del Observatorio de Medios de Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC). Coordinadora académica del Diplomado Comunicación y Género UNAM-CIMAC. Es integrante de la Red Nacional de Periodistas.

reabrió el debate sobre la violación sexual conyugal en contra de quienes aseveraron que esta conducta era el ejercicio abusivo de un derecho; defendió también el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad en la Ciudad de México y presentó, en el 2000, el proyecto a favor de la adhesión en el Código Penal de las causales para practicar un aborto por motivos eugenésicos y malformaciones congénitas –conocida como la Ley Robles–; finalmente, en 2007, volvió a defender este derecho cuando se aprobó la Interrupción legal del embarazo.

Derechos Humanos de las mujeres

Estas noticias electorales son alentadoras para la defensa de los Derechos Humanos (DDHH) de las mujeres, pues garantizar los derechos políticos y electorales de las mujeres es una promesa para todas. Los DDHH son indivisibles, interrelacionados e interdependientes, de tal manera que si uno es reconocido, el resto lo serán; a la vez, si uno de ellos es vulnerado, los demás se verán afectados.

Garantizar los DDHH significa avalar “el conjunto de condiciones de vida indispensables para potenciar de manera integral al ser humano, cuyo reconocimiento jurídico y ético es resultado de procesos de lucha y de conquistas sociales que los pueblos y grupos, histórica y continuamente llevan a cabo a fin de lograr la libertad, igualdad, equidad y dignidad humanas.”³²

Los DDHH de las mujeres implican, además, el reconocimiento de la humanidad de la mitad de la población; como dice Lagarde, “[e]l principio ético más radical de la cultura feminista concentra deseos y haceres para construir la humanidad de las mujeres negada todavía.”³³

Por lo tanto, cuando un gobierno violenta uno de los DDHH de las mujeres, está negando su humanidad y, con ello, su posibilidad de ser sujetas tanto de la política pública para hacer efectivos esos mismos derechos como del presupuesto para crear condiciones para su ejercicio y, en consecuencia, de hacerse realidad en la vida de las mujeres y las niñas.

Un derecho humano fundamental de las mujeres es el derecho a una vida libre de violencia, el cual tiene su base en la igualdad, la dignidad, la no discriminación y la libertad de las mujeres,³⁴ es decir, que el hecho de que las mujeres y las niñas vivan altos niveles de violencia evidencia un Estado omiso y permisivo para tales ataques, a la vez que avala las diversas formas de dominación de género de los hombres sobre las mujeres. Es necesario recordar las palabras de Lagarde, según quien:

como género, las mujeres en México, estamos sometidas en grados diversos a poderes de exclusión, segregación, discriminación y explotación de género, de tipo estructural, por ser mujeres. Dichas formas de opresión están presentes con peculiaridades en todo el país, en todas las edades y las clases sociales, los grupos étnicos y en todos los órdenes y esferas de la vida privada y pública.

Es decir, la violencia de género es parte medular de la opresión de las mujeres. Es más, aunque las interrelaciones entre las diversas formas de opresión son múltiples y simultáneas, unas apoyan a las otras y se nutren de ellas, son a la vez soporte de otras. La violencia es el máximo mecanismo de reproducción de todas las otras formas de opresión y se manifiesta de formas específicas en cada una de ellas.³⁵

La violencia es una constante en la vida de las mujeres; a lo largo de su ciclo de vida se intensifica cuando ellas transgreden el deber ser y se manifiesta de diversas maneras en todas las esferas de acción. Su origen está en la visión estereotipada de un sexo por encima del otro, en el androcentrismo y en la estructura social patriarcal que reproduce la dominación del cuerpo, la sexualidad, las ideas y la vida de las mujeres.

A la violencia constante, naturalizada y exacerbada contra las mujeres, el movimiento feminista la encara con su humanidad, con dignidad por la libertad y con la potencialización de los poderes de las mujeres.

32 Centro de Derecho Humanos Fray Francisco de Vitoria, 2013.

33 Marcela, Lagarde, 1994.

34 Véase Ley general de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2007.

35 Marcela Lagarde, “El derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia”, en *Mujeres, globalización y derechos humanos*. Madrid, Cátedra, 2006. Pp. 10-11.

Números y realidades

Tanto investigaciones como el trabajo permanente de la sociedad civil organizada han dado cuenta de las muestras de desigualdad y violencia que viven las mujeres y las niñas en el país; esta violencia tiene como objetivo minar su proyecto de vida. Las mujeres han investigado, evidenciado y puesto a luz la opresión. Por ejemplo, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) ha documentado que el atroz asesinato de mujeres y niñas por el hecho de serlo, que llamamos feminicidio, cobra la vida de siete mujeres cada día. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016), el 66.1% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido al menos un tipo de violencia en toda su vida, de entre la que sobresale la violencia emocional (49%) y la sexual (41%)³⁶.

El feminicidio, es decir, la violencia extrema contra las mujeres, es el resultado de una serie de violencias que culminan con el asesinato; sin embargo, antes de él, las mujeres viven violencias que tienen un alto impacto en sus vidas, en la de sus familias, en su desarrollo profesional y en su autoestima.

La violencia sexual no sólo se expresa en la violación, sino también en distintos actos que tienen por objeto disminuir el poder de las mujeres sobre su propio cuerpo. Solo 3.5% de las mujeres casadas o unidas deciden si se usa o no algún método anticonceptivo y solo 4% decide cuándo y cuántas hijas e hijos tener.³⁷ Hay que agregar que el 11.7% de las menores de edad que se unieron entre los 10 y 14 años reconocen que no dieron su consentimiento para dicha unión, y que fueron obligadas por estar embarazadas, las robaron o fue mediante un arreglo monetario.³⁸ Además, el 93% de las niñas y adolescentes tuvieron su primera relación sexual entre los 5 y los 9 años, pero solo 2.8% reconoce este hecho como violencia sexual; el resto no tiene los elementos para reconocerlo.³⁹

¿Qué pasa con los agresores? 8 de cada 10 son conocidos de las víctimas; 67% son familiares⁴⁰, pero

sólo 10% de las agresiones son denunciadas.⁴¹ Se trata entonces de casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes que tienen como consecuencia un embarazo donde los padres y agresores triplican la edad de quien sufre abuso y que son personas cercanas a las víctimas.

Este acto violento contra las niñas tiene una segunda parte en la que el Estado es responsable por negar una opción a las víctimas; esta es llamada *violencia institucional*. A pesar de que en México la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046) proporciona directrices para ofertar anticoncepción de emergencia a mujeres víctimas de violación, así como la consejería y servicios de interrupción voluntaria del embarazo en todo el país, las y los médicos encargados de hacerlo niegan a las mujeres el poder decidir sobre su cuerpo. Así, el embarazo en niñas y adolescentes constituye violencia de género que conlleva otras violaciones a sus DDHH, como sucede con el derecho a la integridad, a la salud, a la información, a la autonomía, al acceso a la justicia y a una vida libre de violencia.

Existen poblaciones que enfrentan violencia particular, por ejemplo, la violencia de género contra las mujeres lesbianas y bisexuales, quienes viven amenazas constantes de violaciones a las que llaman correctivas. Estos delitos aún no han sido tipificados y el Estado no ha elaborado aún protocolos de investigación e impartición de justicia para estos casos, como los denunciados por Musas de Metal Grupo de Mujeres Gay A.C. México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en crímenes de odio por homofobia, lesbofobia y transfobia: tan sólo de septiembre a octubre del 2016 fueron asesinadas 10 mujeres transexuales.

La violencia contra los derechos laborales de las mujeres la enfrentan 2.4 millones de personas trabajadoras del hogar; cerca del 80% de ellas es madre y 20% es madre sola. Sobre sus condiciones laborales, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2017, documenta que el 75% gana menos de dos salarios mínimos y que el 97% no tiene acceso a servicios de salud derivados de su actividad laboral. Sólo el 25% recibe aguinaldo y menos del 10% tiene vacaciones con goce de sueldo; además el 30% ha reportado no contar con tiempo de descanso durante su jornada laboral.⁴²

36 Red Nacional de Refugios-Fundar, 2018.

37 INEGI, 2017.

38 ENDIREH, 2016.

39 *Idem*.

40 *Idem*.

41 ENDIREH, 2016, IPAS, 2018.

42 CONAPRED, 2015.

Se estima que 11% de las trabajadoras del hogar son indígenas. En México, existen 68 pueblos indígenas; 21.5% de la población mexicana se reconoce indígena, de ella 13.2 millones son mujeres y 12.5 millones hombres. Sin embargo, no por ser numerosa la población indígena deja de vivir discriminación pues, además de machista, México es un país clasista y racista. La población indígena, pero particularmente las mujeres indígenas sufren más discriminación y son vistas como objetos de la política de asistencia social. Asimismo, la violencia comunitaria es una constante para ellas.

Hay que destacar dos tipos de violencia que atentan contra la representación pública de las mujeres y, por lo tanto, impactan en la aceptación social y simbólica de su participación. Por un lado, se encuentra la reproducción de contenidos que estereotipan, discriminan y violentan a las mujeres en los medios de comunicación. Tan solo en los medios televisivos, se transmiten 46 escenas violentas cada hora y 44 en los medios radiofónicos.⁴³ De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) lejos de sensibilizarse, el flujo constante de información e imágenes sobre violencia generan normalización de la violencia, e incluso enseña la posibilidad de violentar y cómo hacerlo.

Por otro lado, y como nunca antes, las mujeres participaron en el proceso electoral en 2018. El movimiento de mujeres logró avanzar de las cuotas de género a la paridad. Sin embargo, la conquista en DDHH no fue bienvenida; ante este panorama, la violencia no se hizo esperar. Datos obtenidos de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y no Discriminación del Instituto Nacional Electoral (INE) muestran que hubo renunciadas de candidatas de todos los partidos políticos que buscaban ser legisladoras federales como consecuencia de que fueron víctimas de violencia política: 42 mujeres del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 31 de Nueva Alianza (PANAL), 30 candidatas de la coalición Por México al frente –integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC)– y 25 de la alianza de los partidos Todos por México –conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), PVEM y PANAL–. La violencia en estas elecciones sumó

campañas de desprestigio, amenazas, atentados y asesinatos.

Las mujeres y las niñas, como diría Marcela Lagarde,

*somos diversas en el arcoíris de nuestras identidades y condiciones étnica, expresadas en tantas y tantas lenguas y vividas en tradiciones tan variadas: diversas en nuestras opciones eróticas y sexuales. Somos cada vez más diversas en nuestras profesiones, actividades, oficios y quehaceres. Y, desde luego, en la pobreza y en la riqueza. Nuestras particularidades nos hacen abarcar una gama enorme de conocimientos, de sabidurías y de mentalidades.*⁴⁴

Cada vez con más frecuencia y con una voz más alta y clara, las demandas de las mujeres han llegado a espacios internacionales, como sucedió con la reciente evaluación del Comité de expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW por sus siglas en inglés). Esto puede apreciarse en la falta de presupuesto etiquetado, rendición de cuentas y transparencia para las acciones a favor de la igualdad de género, en la demanda para adoptar medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida de las mujeres, las niñas, las jóvenes, las trans, lesbianas y bisexuales, las indígenas, las mujeres vinculadas a las migraciones, y en la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo decente para trabajadoras del hogar. Además, se ha hecho hincapié en la justa y digna representación en los medios de comunicación y la garantía de seguridad para quienes aspiran a ocupar cargos de elección popular.

Ausentes del discurso oficial

El movimiento de mujeres y feminista en México ha logrado grandes avances legislativos; uno de ellos dio pie a la que se ha llamado la cuarta transformación del país. En el proceso electoral más grande de México, el 1 de julio la ciudadanía mexicana votó por 3 400 cargos en disputa, entre ellos, Presidente para el periodo 2018-2024, 30 gubernaturas (todas las entidades federativas excepto Baja California y

43 Consejo Ciudadano por la Equidad de Género en los Medios de Comunicación, 2016.

44 Lagarde, Marcela, 1994.

Nayarit), gobiernos municipales, 128 senadurías y 500 diputaciones federales, además de las legislaturas estatales.

Transitar de las cuotas a la paridad electoral ganada por el movimiento de mujeres hizo posible que las mujeres contendieran por un cargo público como nunca antes; incluso fueron las primeras opciones como medida afirmativa. Sin embargo, el discurso político desdibujó a la población de mayor importancia en el contexto electoral: las votantes. El gran ausente durante las campañas fue el aborto, la demanda histórica por el derecho a decidir sobre el cuerpo fue el tema intocable para no comprometer los intereses partidarios. Incluso en *Femsplaining* –el documento que el equipo de AMLO planteó sobre la política pública para las mujeres que impulsaría en caso de que ganara las elecciones– el aborto no se tocó.

Por todo ello, en 2018, una vez iniciada la cuarta transformación, las feministas decimos con firmeza que no daremos ni un paso atrás en los derechos humanos de las mujeres. Sean bienvenidas todas las propuestas para mejorar la vida de las mujeres, el derecho a una vida libre de violencia, derecho universal al cuidado, libertad de expresión y a la protesta política, acceso a los beneficios socioculturales, representación paritaria en la política, política abierta al escrutinio internacional en DDHH y defensa contra despojo causado por los megaproyectos. El compromiso de las feministas es por la exigencia de condiciones dignas de empleo y la eliminación de las brechas salariales de género, además de la ratificación del Convenio 189 para que las trabajadoras del hogar gocen de derechos laborales; nos comprometemos a obtener acciones contundentes para la reducción de las muertes maternas y la violencia obstétrica, a disminuir el embarazo adolescente, en la defensa del Estado laico y el acceso seguro y gratuito en todo el territorio al aborto. Asimismo, buscamos la impartición de justicia para víctimas de violencia y tortura sexual, así como castigo a los agresores.

Exigimos respeto, atención especializada y garantía para el ejercicio pleno y libre de violencias y discriminación, de los derechos de las mujeres indígenas, en situación de migración, en reclusión, de mujeres trans y lesbianas, así como de todas las expresiones sexo-genéricas con un enfoque intercultural. Exigimos la eliminación de los obstáculos al matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del

mismo sexo, además de promover el reconocimiento de la identidad de las personas transgénero, transexuales, intersexuales y de género no binario.

Hay temas irrenunciables: el acceso al aborto es uno de ellos; lo es también una vida libre de violencia. El hecho de que las mujeres estén en el poder abre la puerta a una forma distinta de hacer política, de ejercer el poder: estos son los poderes de las mujeres. Una vez más, como dice Lagarde,

[a]sí el nuevo milenio puede ser edificado sobre una nueva ética que ubique la igualdad y la libertad en el ámbito de un compromiso, en el que la integridad y la riqueza sean derecho de cada quien. Solo si subordinamos la política a la ética, podremos lograr el buen vivir y la paz para cada persona, para cada comunidad, para nuestro amado país, para todas y para todos.⁴⁵

Hay esperanza

Tu mente no puede imaginar algo que no ha visto, así, la profesora benemérita de la Saint Louis University, Diana B. Carlin, dice que mientras más mujeres se postulen, la gente se acostumbra a ver mujeres y si hay más mujeres, será más común ser elegidas. Por lo tanto, queremos paz, justicia, dignidad, libertad y respeto a nuestra vida para que sea cada vez más normal y más común la igualdad.

Este trabajo tiene que realizarse desde el trabajo directo con mujeres en espacios públicos y digitales, a partir de la incidencia política para lograr mejoras en la igualdad legal y formal; debemos pronunciarnos en las calles, en la red y en los foros internacionales; es necesario que vigilemos la acción gubernamental, la efectiva implementación de recursos para la igualdad de género y la acción directa de quienes ejercen la función pública. Cuando todo esto se logre, la igualdad para las mujeres será una realidad. ¿Y la dignidad? Como diría Houria Bouteldja, “simple como el amor revolucionario. Ahí nos empujan nuestras alas, alzamos vuelo.”⁴⁶

45 Lagarde, Marcela, 1994.

46 Bouteldja, Houria, *Los blancos, los judíos y nosotros*. México, Akal/Inter Pares, 2017.



Panorama y desafíos para las organizaciones de derechos humanos y para las personas defensoras de derechos humanos ante las actuales definiciones electorales en México

Antonio Cerezo Contreras*

Antecedentes

El Comité Cerezo México comenzó su actividad como organización de derechos humanos en agosto de 2001. El origen de nuestra organización fue la detención arbitraria, tortura y posterior encarcelamiento en penales de máxima seguridad de Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras y de Pablo Alvarado Flores (indígena náhuatl). Esas violaciones a los derechos humanos se dieron en un contexto histórico que en esos años se nombró como de “transición a la democracia”.

En el año 2000 el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la elección presidencial después de más de 60 años en el poder, una gran parte de la sociedad estaba muy enojada con este partido responsable de graves violaciones de derechos humanos a lo largo de la historia moderna de nuestro país.

* Coordinador del área internacional del Comité Cerezo México, organización de derechos humanos ganadora del Premio Aquisgrán de la Paz, Alemania, 2012. Es defensor de derechos humanos, nació en la Ciudad de México en marzo de 1977. Comenzó su labor social alfabetizando en comunidades indígenas huicholas del estado de Nayarit en 1992. Detenido arbitrariamente, torturado y preso de conciencia del 13 de agosto de 2001 hasta el 16 de febrero de 2009, cuando salió de la cárcel con su hermano Héctor Cerezo Contreras. Su hermano Alejandro, detenido el mismo día, salió libre en marzo de 2005. Estuvo preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México. Fue trasladado un año al penal de máxima seguridad en Matamoros, Tamaulipas y liberado desde el penal de Atlacholoaya, Morelos. Desde finales del 2009 imparte talleres de derechos humanos y seguridad para organizaciones de derechos humanos y defensores. Ha acompañado a víctimas de violaciones de derechos humanos

La masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968, la masacre del 10 de junio de 1971, la ejecución extrajudicial de dirigentes campesinos, obreros, maestros y luchadores sociales. Así como la tortura, la desaparición forzada de integrantes de grupos armados insurgentes en la década de los setentas y ochentas, son algunas de las violaciones a derechos humanos que se cometieron, el PRI era el verdugo del descontento social y representaba lo peor frente a una gran parte de la sociedad.

El año 2000 fue vivido como un año de cambio o de posible estallido social, el desmantelamiento del Estado benefactor ya estaba en marcha, las reformas neoliberales ya habían dado a la iniciativa privada la posibilidad de explotar los recursos naturales del suelo y el subsuelo nacional, gracias a la reforma en 1992 del artículo 27 constitucional. La gran crisis política resultado del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, de la gran crisis económica que se conoció como el “error de diciembre” del 1994 y de la irrupción del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en varios estados en 1996, fueron elementos que fortalecieron el deseo de cambio en gran parte de la sociedad mexicana.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, ese cambio no se dio hacia la izquierda con Cuauhtémoc Cárdenas y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a nivel federal. Sino que fue Vicente Fox bajo la bandera del Partido Acción Nacional (PAN), un partido considerado de derecha y conservador, quien pudo capitalizar la mayor parte del descontento social y obtener los votos suficientes para sacar por fin al PRI de los Pinos.

Hoy como en el 2000 la sombra del fraude se proyectó en las elecciones y hoy como hace 18 años el presidente del PRI reconoció casi de inmediato el triunfo del contrincante y la transición fue tersa, así como dicen que ha sido en este cambio de gobierno.

Resultado de la alternancia en el poder, la llamada transición a la democracia despertó ilusiones en buena parte de la clase trabajadora y sobre todo en la clase media que ya sentía la crisis más cercana. Pero esas ilusiones se quedaron ahí, en ilusiones, pues el país no superó la crisis económica que vivía por lo menos desde 1994.

En materia de Derechos Humanos se pensó que el viejo PRI, el de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y del Centro de Investigación para la Seguridad Nacional (CISEN); el PRI de las masacres de campesinos en

Aguas blancas, Guerrero en 1995; de la masacre de Acteal, Chiapas en diciembre de 1997, se iba también. Los métodos de tortura, detenciones arbitrarias, amenazas de muerte, vigilancia y hostigamiento contra defensores de derechos humanos y luchadores sociales, así como la militarización contrainsurgente y la paramilitarización eran propios de un partido.

Sin embargo, antes del término del sexenio de Vicente Fox ya los analistas hablaban de “la transición fallida”; de que el “voto útil” para sacar al PRI de los Pinos resultó inútil para modificar la política económica neoliberal del Estado mexicano e inútil para acabar con las graves violaciones de derechos humanos en nuestro país.

A nosotros nos quedó muy claro desde el 13 de agosto de 2001 que en la democracia panista la policía y el ejército torturaban, que los penales federales eran y siguen siendo centros donde se violan permanente y sistemáticamente los derechos humanos de los presos y de sus familiares.

Nos quedó claro que nos podían amenazar de muerte por denunciar esas violaciones a nuestros derechos. La primera amenaza que recibimos vía telefónica fue en diciembre de 2001, y con los años se fueron acumulando hasta llegar a 16, así como innumerables actos de intimidación y hostigamiento. En el gobierno de Fox llegaron al extremo de colocar una cámara satelital frente a la casa oficina del Comité.

Nos quedó más clara aún la política de Vicente Fox cuando la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido era ejecutada extrajudicialmente en su despacho del entonces Distrito Federal, días antes de asistir a nuestra primera audiencia en el penal de máxima seguridad llamado entonces “La Palma”; hoy “Altiplano”.

El 19 de octubre de 2001 se acabó para nosotros toda posibilidad de cambio estructural en materia de derechos humanos, y se acabó cualquier resquicio de duda sobre la moral de un gobierno que hizo una campaña nacional e internacional para denostar a una defensora de derechos humanos que no podía ya defenderse de las acusaciones de que estaba “loca” y se había suicidado, a pesar de que los estudios periciales jamás dejaron lugar a dudas de que se trataba de una ejecución extrajudicial.

Pero a quienes minimizaron estas violaciones a los derechos humanos, considerándolas hechos aislados o peor aun justificándolas, les faltaba explicar lo sucedido en San Salvador Atenco, Estado de México,

los días 3 y 4 de mayo de 2006. Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, y Vicente Fox ordenaron un operativo donde se torturó sexualmente a mujeres, se ejecutó extrajudicialmente a dos personas, se torturó y encarceló a decenas de manifestantes y de pobladores que no tenían nada que ver con los hechos. Después vino la represión en Oaxaca, meses de terror gubernamental que encontraron su clímax en noviembre de 2006.

La “transición a la democracia” cerró con broche de oro: un fraude electoral...la violación masiva del derecho al voto de miles, tal vez, millones de mexicanos.

La larga noche de terror

En la actualidad, agosto de 2018, la grave crisis en materia de violaciones a los derechos humanos es inocultable, aunque sea todos los días suavizada, maquillada, minimizada.

Esta larga noche de terror no inició con la declaración de guerra de Felipe Calderón Hinojosa en el 2006 contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, pero sí se intensificó y se amplió.

Ya vimos cómo Vicente Fox fue su precursor, antes de la implementación de los llamados “operativos conjuntos”, al poner en marcha los operativos “México seguro”, casi con las mismas características: la centralización del mando de los operativos en el ejército y la subordinación de las autoridades civiles a éste.

Antes de la firma de la Iniciativa Mérida en 2007, Vicente Fox en 2005 había firmado el Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), acuerdo militar y económico con Estados Unidos y Canadá.

Desde nuestra perspectiva, con Calderón se inicia el proceso de la construcción de un Estado represor de las libertades democráticas y civiles que implicaba desatar una dinámica de guerra en contra del pueblo. Esta dinámica abarcaba al pueblo organizado en la defensa de sus derechos humanos; pero también a gran parte del pueblo que no estaba organizado.

La aplicación de la llamada “guerra” contra la delincuencia organizada cumplió sus verdaderos objetivos no públicos:

1. Lograr el necesario control social para legalizar lo que se había hecho en materia económica por medio de las últimas 11 llamadas reformas estructurales.
2. Se creó un enemigo interno que justificó la militarización, que trajo el crecimiento exponencial de violaciones graves a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas: detenciones arbitrarias, allanamientos, masacres, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada, entre otras.
3. Se logró, hasta cierto punto, el ocultamiento de la responsabilidad del Estado en el diseño y aplicación de esta estrategia que tenía como eje fundamental el terror, esto gracias a la creación intensiva de grupos paramilitares, la mano siniestra del Estado, y la creación del discurso de que la violencia extrema entre los grupos delictivos y contra la población era resultado de la debilidad del Estado y de la disputa del territorio por parte de estos grupos.
4. Se ha puesto en entredicho la eficacia y la utilidad del Sistema Internacional de Derechos Humanos para reforzar la idea de que los problemas que hoy vivimos de graves violaciones a los derechos humanos no son un problema estructural del Estado mexicano; sino un problema de malos funcionarios y de malas decisiones de algunos funcionarios.

Gracias a la estrategia de terror contra la población que se intensificó con Calderón, Enrique Peña Nieto no encontró una resistencia organizada para aprobar las llamadas reformas estructurales con el respaldo del PAN y del PRD plasmado en el Pacto por México.

La única reforma aprobada por Calderón de las últimas 11 es la Reforma Laboral, que fue aprobada en el 2012; la resistencia de la clase trabajadora ante esta reforma fue simbólica, el tejido social y organizativo estaba lo suficientemente golpeado y desarticulado como para poder resistir de otra manera.

Es sintomático que todavía en 2008 Calderón no pudiera aprobar la Reforma Energética que sí pudo hacer Peña Nieto en 2013. En 2008 el movimiento popular tuvo la fuerza todavía de reaccionar, de protestar y de manifestarse en contra de dicho intento, todos recordaremos a las “adelitas” y sus brigadas en las manifestaciones defendiendo el recurso natural que Lázaro Cárdenas nacionalizara en 1938. Sin

embargo, con cinco años más de terror, de represión política, de violencia de Estado se logró que la reforma de 2013 pasara frente a una resistencia simbólica de quienes todavía tenían la capacidad de protestar contra esta injusticia.

El movimiento popular aunque disminuido no dejó de protestar ni mucho menos de denunciar lo que sucedía en nuestro país: en el 2010 el Comité Cerezo México, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (ACUDEH A.C.), y otras organizaciones de derechos humanos y populares conformamos la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, al principio fue pequeña numéricamente, pero la denuncia fue en aumento con la organización de cientos de víctimas de esta grave violación a los derechos humanos.

Avances y simulación

En este contexto adverso para la defensa de los derechos humanos, el gobierno de Felipe Calderón retoma en 2011 la iniciativa de algunas organizaciones de derechos humanos para hacer una reforma constitucional que plasmará en nuestra Carta Magna los derechos humanos y obligará al Estado a considerar el Sistema Internacional de Derechos Humanos al mismo nivel que nuestras leyes. Al mismo tiempo lanza la iniciativa de construir un Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.

ACUDEH A.C. y el Comité Cerezo retoman esta iniciativa y redactan un primer borrador junto con la Secretaría Ejecutiva de la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT)⁴⁷ para que dicho mecanismo fuese contemplado como una ley federal y no como un simple acuerdo con alguna instancia de gobierno. Diferentes organizaciones nacionales e internacionales se sumaron a la construcción del Mecanismo que fue votado y aprobado en la Cámara de Senadores y de Diputados. Dicho Mecanismo, desde nuestro punto de vista, se convertiría en un instrumento más para defender a los defensores de las agresiones del Estado en su contra, por paradójico que esto se lea.

47 La red agrupa más de 80 organizaciones de defensa y promoción de derechos humanos con sede en diferentes estados de la República mexicana.

El Mecanismo de protección, bien utilizado, se podría convertir en un instrumento para disminuir el riesgo y elevar el costo político al Estado frente a sus propias agresiones. En ningún momento pensamos que el Mecanismo por sí mismo evitaría las agresiones contra los defensores, pues la política del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa era la de presumir frente a otros gobiernos la creación del Mecanismo y de la reforma constitucional para legitimarse y fingir un supuesto interés en el tema, mientras continuaba con su política de control social, político y contrainsurgencia mediante el terror.

2012-2018 un paso más al fondo del abismo

Hubo algo que no cambió en 12 años de gobierno panista: la política económica neoliberal y esa misma política aplicada de facto fue la política económica que Enrique Peña Nieto legalizó.

No cambiaron esa política económica tampoco los beneficiarios de la misma ni las víctimas. Pero hubo una cosa que sí cambió: el discurso. De la guerra, habíamos pasado a la lucha contra la delincuencia y “mágicamente” pasamos, con el PRI de regreso, a construir la paz, a hacer “todo lo posible” para hacer avanzar a México, pero el discurso no cambió la práctica represiva del Estado; por el contrario, aumentaron los casos de agresiones a defensores de derechos humanos, de ejecuciones extrajudiciales, de tortura, de detenciones arbitrarias y de desapariciones forzadas.

El eje de la militarización y paramilitarización se profundizó y se amplió todavía más.

Los grandes monopolios se siguieron beneficiando de esta política económica neoliberal y de la estrategia de control social, represión política y contrainsurgencia del Estado mexicano, para ellos se realizó en 2012 la ya mencionada Reforma Laboral, que abrió las puertas al *outsourcing* o subcontratación lo que aumentó la pérdida de los derechos laborales de los trabajadores. Se realizó la reforma constitucional de educación en febrero de 2013; la Reforma en Materia de Competitividad Económica en junio de 2013; la Reforma de Telecomunicaciones en junio de 2013; también la Reforma Energética en diciembre de ese mismo año. En 2014 se aprobaron las reformas Financiera en el mes de enero; al Código Nacional

de Procedimientos Penales en el mismo mes; en Materia de Transparencia en febrero y ese mismo mes la Reforma Político Electoral. Por último, se creó la Nueva Ley de Amparo en abril.

El cierre de este ciclo de reformas fue mediante la creación de la llamada Ley de Seguridad Interior en 2017 como un paso más que rompe el equilibrio democrático entre los tres poderes, en los cuales se funda una sociedad que se precia de ser democrática, pero que abre el paso a la dictadura legal del titular del Poder Ejecutivo sobre el resto de la sociedad.

Una nueva posibilidad

Más de 35 años de política neoliberal aplicada por los tres principales partidos en México, PRI, PAN y PRD, en diferentes momentos y 12 años de terror que se reflejan en el número de muertes violentas, más de 300 mil, en el número de desaparecidos de manera forzada y desaparecidos a manos de particulares, oficialmente más de 32 mil y según organizaciones populares más de 300 mil también. 35 años de neoliberalismo y miles de feminicidios, decenas de niños ejecutados extrajudicialmente en retenes militares y desde helicópteros de la marina como pasó este año 2018 en Tamaulipas; miles de desplazados de manera forzada y de despojados de sus territorios a favor de las grandes empresas transnacionales. 35 años de neoliberalismo y de pérdida de la seguridad social para los trabajadores, de incremento de la jornada laboral de 8 a 10 horas, de pérdida del poder adquisitivo del salario, de un salario de 88 pesos que no alcanza ni para 7 kilos de tortillas. 35 años de neoliberalismo, 12 años de terror y tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim, dueño de minas, constructoras, banca, tiendas de autoservicios, inversor en el petróleo, dueño absoluto de la telefonía. 35 años de neoliberalismo y 12 de terror y Cementos de México es una de las empresas privadas más grandes del mundo, al lado de Grupo México, de Bimbo, de Femsa y de otras pocas empresas que se han beneficiado de la desgracia de millones de mexicanos, no por nada en el clímax de la campaña electoral Andrés Manuel López Obrador (AMLO) los llamó "minoría rapaz", aunque hoy nos hable de reconciliación y hasta nos los ponga de ejemplo. 35 años de neoliberalismo de los cuales por lo menos 12 años fueron de terror neoliberal que fue la causa del nuevo hartazgo social que le permitió a llegar a

la presidencia en unas elecciones donde el voto fue un voto de esperanza, de hartazgo, de posibilidad de cambio.

Cierto, no todas las personas que votaron el 1 de julio de 2018 por AMLO lo hicieron contra el neoliberalismo, menos contra el capitalismo; pero hubo quienes sí votaron contra el neoliberalismo de manera consciente y convencida de que esa política económica es la responsable de la desgracia nacional.

El mismo programa de Morena expone que el Estado está secuestrado por una minoría: la oligarquía que impone el neoliberalismo; millones de personas lo creen así y por ello votaron por una opción diferente a los partidos tradicionales.

Sin embargo, ese voto consciente no alcanzaba para lograr una votación masiva a favor de Morena, por lo que éste como partido comenzó a tejer alianzas con personas y grupos políticos que moderados en su lenguaje y en sus posiciones políticas eran conscientes de que seis años más de terror implicarían la posibilidad real de un estallido violento del descontento social.

Morena cambió poco a poco su discurso, de proponer la derogación de todas las reformas llamadas estructurales, hoy tenemos que se harán consultas, que no se derogarán todas las reformas y que se buscarán "nuevas vías" de reconciliación.

Y es que las alianzas que estableció Morena representan intereses opuestos que este partido pretende conciliar.

¿Y los Derechos Humanos, qué?

El presidente electo se ha comprometido a gobernar respetando los derechos humanos, una de sus primeras propuestas fue crear una Comisión de la Verdad para el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de manera forzada en Iguala, Guerrero en septiembre de 2014 y otra de las propuestas fue hacer una Ley de Amnistía, dirigida al sector más vulnerable de la sociedad que por necesidad se había involucrado en la comisión de delitos no graves.

Sin embargo, de parte del que será el nuevo gobierno, no ha habido una declaración que nos exponga el origen de las graves violaciones de los derechos humanos en México, ni que nos dé una solución global a este problema.

Se tocan algunas expresiones de violaciones de derechos humanos, pero se mezclan con delitos cometidos entre particulares. En los foros de víctimas que iniciaron el 7 de agosto en Ciudad Juárez, Chihuahua hubo efectivamente víctimas: víctimas de delitos y víctimas de violaciones de derechos humanos, el gobierno electo sabe bien que no puede tratar de igual manera los casos, pues no es lo mismo investigar delitos que investigar violaciones de derechos humanos, pues lo segundo lo obliga a investigar a agentes del Estado: a mandos, corporaciones, gobernadores, presidentes municipales, etc.

¿Se atreverá el nuevo gobierno a develar la verdad histórica sobre estos años de terror neoliberal?

¿Se atreverá a juzgar a los responsables intelectuales y materiales; a los facilitadores de las violaciones de derechos humanos y a los beneficiarios de las mismas?

¿Se atreverá a tocar las estructuras estatales y paraestatales responsables de las graves violaciones de derechos humanos, condición indispensable para lograr la reparación integral del daño?

¿Se atreverá a promover el derecho a la memoria de las víctimas y se atreverá a nombrar a los victimarios?

¿A partir de qué fecha de esta larga noche neoliberal en México se comenzará a garantizar los derechos de las víctimas? ¿A partir del inicio del neoliberalismo, a partir de 1994 por ser un parteaguas histórico en la movilización popular? ¿A partir del 2006 para no tocar casos incómodos para varios de los que hoy serán funcionarios?

Desde nuestra perspectiva no es momento de esperar sentados las respuestas del presidente electo y las acciones del futuro gobierno; más bien, es momento de enunciar y evidenciar los aspectos poco tocados o poco mencionados dentro del discurso de respeto y garantía a los derechos humanos.

Desde nuestra perspectiva es momento de poner sobre la mesa los temas que muchos quisieran evadir o invisibilizar, como son los presos por motivos políticos, de quienes resistieron, denunciaron y se defendieron del neoliberalismo; de personas desaparecidas de manera forzada por defender derechos humanos o participar en grupos armados insurgentes; de las limitaciones de la ley federal que creó el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Por esta razón, el 9 de julio el Comité Cerezo México y ACUDEH A.C

difundieron una carta abierta al presidente, hoy oficialmente electo, Andrés Manuel López Obrador, donde se hacía el exhorto y la exigencia de considerar tres aspectos para iniciar un proceso que garantice los derechos de verdad, memoria, justicia y reparación integral del daño para todas las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Esas tres exigencias son:

1. Una Ley de Amnistía Federal
2. Comisiones de la verdad
3. Ley General de Protección a Personas Defensoras y Periodistas

Emitir una Ley de Amnistía Federal para presos, perseguidos y exiliados por motivos políticos en el país sería el reconocimiento de que siempre hubo defensores de derechos humanos y luchadores sociales víctimas de la represión; sería también reconocer su contribución a este cambio posible.

La creación de las Comisiones de la verdad sobre los casos de desaparición forzada significaría reconocer que existen no sólo casos emblemáticos por motivos políticos, como el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o el de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, desaparecidos de manera forzada el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. Sino también sería reconocer que esa práctica se ha generalizado y se ha aplicado en contra del pueblo trabajador, especialmente contra la juventud, aunque éste no se encuentre organizado por reivindicaciones políticas.

Crear una Ley General de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, daría la posibilidad de que el Mecanismo de protección pudiera investigar quiénes son los perpetradores y autores intelectuales de las agresiones, y obligaría a los tres niveles de gobierno a homologar sus procedimientos, además de que evitaría ese perverso argumento de culparse entre autoridades federales y estatales de la no protección de los periodistas y defensores de derechos humanos.

¿Hasta dónde avanzará el futuro gobierno en las obligaciones del Estado respecto a los derechos humanos?

La práctica del futuro gobierno nos dará la respuesta, pero también nuestra capacidad de ser creativos, de proponer, de buscar alternativas no sólo posibles, sino siempre pensando que la organización del

pueblo, su movilización consciente, permanente y su capacidad de resistencia pueden ampliar los márgenes del actual gobierno que seguramente enfrentará todos los argumentos y toda la campaña mediática de quienes pretenden cambiar el derecho a la verdad de las víctimas por el derecho de acceso a la justicia, de aquellos grupos de poder que hoy pretenden evadir su responsabilidad jurídica en las graves violaciones de derechos humanos y en la comisión de delitos jurando invertir más dinero en México.

¿Hasta dónde podrá el próximo gobierno garantizar que termine esta larga noche de terror?

En nosotros como parte de la sociedad organizada está parte de la respuesta, la otra está en quienes serán gobierno, en su congruencia con su propio programa como Morena, en su capacidad de no ceder a realizar únicamente lo posible, porque lo posible no es lo mismo para el pueblo trabajador explotado, víctima permanente de las violaciones a sus derechos humanos, que para los empresarios que se han hecho más ricos después de 35 años de política económica neoliberal.

La *verdad* implica conocer quiénes fueron los autores intelectuales de la estrategia de violaciones de derechos humanos y quiénes los perpetradores, los facilitadores y los beneficiarios de la misma. Implica también conocer a las víctimas. La *justicia* implica que las víctimas puedan acceder a la justicia y que los autores intelectuales y materiales puedan ser juzgados apegados al derecho, sin venganzas, pero sí con la severidad y la proporcionalidad que sus crímenes y violaciones a los derechos humanos merecen.

Sin *verdad* y sin *justicia* no puede haber *reparación integral del daño* y mucho menos se pueden crear las *garantías de no repetición* que es el aspecto central de la reparación integral, pues implica el desmonte de las estructuras legales y paraestatales que provocaron e impulsaron la comisión de violaciones de derechos humanos.

La *reparación integral del daño* implica también medidas de rehabilitación, indemnización, satisfacción hacia las víctimas y por último el derecho humano a la memoria; implica la obligación del Estado de no interferir en las actividades que la sociedad organizada realice para recordar a las víctimas y a los victimarios, pero además el Estado debe recordar a éstos desde sus instituciones.

Nosotros también creemos en el perdón, pero en el perdón social que nace de la *verdad*, de la *justicia*, de la *memoria* y de la *reparación integral del daño*; no en el perdón individual como forma de cerrar una herida sin llegar a las causas de lo que ocasionó el dolor y la desgracia; no en el perdón individual que no garantiza el desmonte de las estructuras estatales y paraestatales que permitieron, estimularon y encubren las graves violaciones de derechos humanos que hemos vivido año con año.

Rosa Luxemburg Stiftung

Oficina Regional en México, Centroamérica y Cuba

Calz. General Pedro Anaya 65,
Colonia San Diego Churubusco,
Coyoacán, C.P. 04120, CDMX

Teléfonos:

(52 55) /5544-5500/

/ 5544-3097 /

/ 5336-2858 /

